

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



**Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado
en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116.**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTORES:

Bach. Vásquez López, Carlos Renato

Código ORCID: 0000-0002-0110-9855

Bach. Yupanqui Zuñiga, Andrea Nadieshda

Código ORCID: 0000-0001-6651-1135

ASESORA:

Ms. Gonzales Napurí, Rosina Mercedes

DNI N° 32965438

Código ORCID: 0000-0001-9490-5190

NUEVO CHIMBOTE – PERÚ

2025

HOJA DE CONFORMIDAD DE LA ASESORA

La presente tesis titulada **“Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116”**, ha sido elaborado según el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Santa (aprobado mediante Resolución N°337-2024-CU-R-UNS, de fecha 12 de abril de 2024) para obtener el Título Profesional de Abogado, mediante la modalidad de sustentación y aprobación de tesis, por tal motivo firmo el presente trabajo en calidad de asesor, designado mediante Resolución Decanatural N° 104-2024-UNS-DFEH.



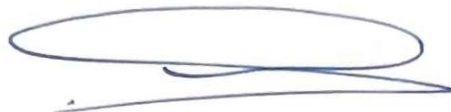
MG. ROSINA MERCEDES GONZALES NAPURI
DNI N° 32965438
ASESORA

Código ORCID: 0000-0001-9490-5190

HOJA DE AVAL DEL JURADO EVALUADOR

Concluida la sustentación del Informe de Tesis titulado: “Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116”, presentado por los bachilleres Carlos Renato Vásquez López (Cód. 0201935019) y Andrea Nadieshda Yupanqui Zuñiga (Códg. 0201935014), el Jurado Evaluador designado deja constancia de su aprobación, suscribiendo el presente documento en señal de conformidad.

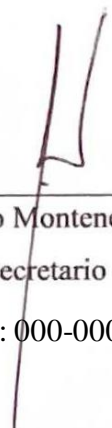
Asimismo, se certifica que la tesis fue revisa y aprobada por el Jurado Evaluador designado mediante Resolución Decanatural N°521-2025-UNS-DEFH de fecha 15 de octubre del 2025.



Mg. Julio César Cabrera Gonzales

Presidente

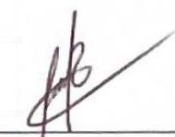
Cód. ORCID: 0000-0002-1387-6162



Ms. Eduardo Montenegro Vivar

Secretario

Cód. ORCID: 000-0002-6775-702X



Mg. Rosina Mercedes Gonzales Napurí

Integrante

Cód. ORCID: 0000-0001-9490-5190



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES



ACTA DE CALIFICACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En el Distrito de Nuevo Chimbote, siendo las siete de la noche del día treinta de diciembre del año dos mil veinticinco, en mérito a lo dispuesto en la Resolución N° 728-2025-UNS-CFEH, se reunió en el Aula Magna del Pabellón de la Escuela de Derecho y CC.PP. -Campus 2 de la UNS, el Jurado Evaluador conformado por el Mtr. Julio César Cabrera Gonzales -Presidente-, Mg. Eduardo Montenegro Vivar -Integrante titular y Mg. Rosina Mercedes Gonzales Napuri -integrante titular asesora-; con el fin de evaluar la sustentación de Tesis para optar el Título de ABOGADO del Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas **Carlos Renato Vásquez López**, quien expuso y sustentó el trabajo intitulado: **"Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116"**.

Terminada la sustentación, el graduado respondió las preguntas formuladas por los miembros del Jurado.

El Jurado después de deliberar sobre aspectos relacionados con el trabajo, contenido y sustentación del mismo, declara:

APROBAR POR UNANIMIDAD al Bachiller antes mencionado, según el Art. 73 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNS.

Siendo las Ocho con Trece de la noche del mismo día, se da por terminado el acto de sustentación.

Julio César Cabrera Gonzales/Eduardo Montenegro Vivar/ Rosina Mercedes Gonzales Napuri

Presidente

Secretario

Integrante



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES



ACTA DE CALIFICACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En el Distrito de Nuevo Chimbote, siendo las siete de la noche del día treinta de diciembre del año dos mil veinticinco, en mérito a lo dispuesto en la Resolución N° 728-2025-UNS-CFEH, se reunió en el Aula Magna del Pabellón de la Escuela de Derecho y CC.PP. -Campus 2 de la UNS, el Jurado Evaluador conformado por el Mtr. Julio César Cabrera Gonzales -Presidente-, Mg. Eduardo Montenegro Vivar -Integrante titular y Mg. Rosina Mercedes Gonzales Napuri -integrante titular asesora-; con el fin de evaluar la sustentación de Tesis para optar el Título de ABOGADA de la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas **Andrea Nadlesha Yupanqui Zúñiga**, quien expuso y sustentó el trabajo intitulado: "**Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116**".

Terminada la sustentación, la graduada respondió las preguntas formuladas por los miembros del Jurado.

El Jurado después de deliberar sobre aspectos relacionados con el trabajo, contenido y sustentación del mismo, declara: Aprobar por unanimidad a la Bachiller antes mencionada, según el Art. 73 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNS.

Siendo las Ocho con quince de la noche del mismo día, se da por terminado el acto de sustentación.

Julio César Cabrera Gonzales/Eduardo Montenegro Vivar/ Rosina Mercedes Gonzales Napuri

Presidente

Secretario

Integrante

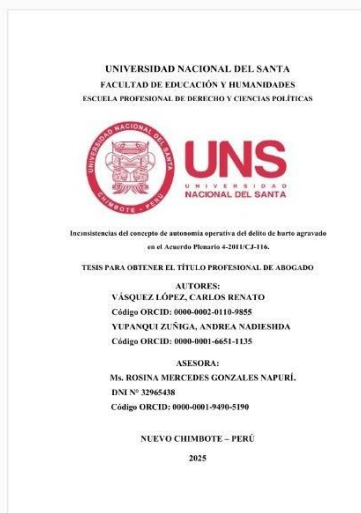


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Carlos Renato Vásquez López
Título del ejercicio: TESIS
Título de la entrega: Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delit...
Nombre del archivo: TESIS_FINAL_RENATO_-_ANDREA_27-11-25.docx
Tamaño del archivo: 291.04K
Total páginas: 142
Total de palabras: 32,602
Total de caracteres: 183,293
Fecha de entrega: 19-dic-2025 10:00a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2849482318



Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	18%	3%	9%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	3%
2	vbook.pub Fuente de Internet	2%
3	vsip.info Fuente de Internet	1%
4	de.scribd.com Fuente de Internet	1%
5	qdoc.tips Fuente de Internet	1%
6	dokumen.pub Fuente de Internet	1%
7	lpderecho.pe Fuente de Internet	1%
8	idoc.pub Fuente de Internet	<1%
9	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	<1%
10	repositorio.usmp.edu.pe Fuente de Internet	<1%
11	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1%
12	repositorio.uns.edu.pe Fuente de Internet	<1%
13	repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet	<1%
14	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	<1%

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, por su amor incondicional, su apoyo constante y su paciencia a lo largo de este proceso. A nuestros docentes y compañeros, quienes nos inspiraron a crecer cada día. A todas las personas que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen al progreso de la educación y el conocimiento.

Los autores

AGRADECIMIENTO

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de esta tesis, a nuestra asesora, cuyo conocimiento y orientación fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo, a nuestras familias, por su paciencia, comprensión y ánimo durante todo este proceso. Y, finalmente, a todas aquellas personas y entidades que, de alguna manera, contribuyeron al éxito de esta investigación.

Los autores

ÍNDICE

HOJA DE CONFORMIDAD DEL ASESOR	ii
ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD	iii
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA	iv
RECIBO TURNITIN	vi
PORCENTAJE PORCENTUAL DE TURNITIN	vii
DEDICATORIA	viii
AGRADECIMIENTO	ix
ÍNDICE	x
RESUMEN	xiii
ABSTRACT	xiv
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	15
1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA	16
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.2.1. OBJETIVO GENERAL	19
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	20
1.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS	20
1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	20
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	22
2.1. ANTECEDENTES	23
2.2. BASES TEÓRICAS	25
2.3. MARCO CONCEPTUAL	27
2.3.1. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y COHERENCIA	27
NORMATIVA	
a. Definición de principio de legalidad	27
a.1. Función del principio de legalidad	26
a.2. Fundamento constitucional del principio de legalidad	29
a.3. Justificación jurídico-política y justificación jurídico-penal del principio de legalidad	30
a.4. El principio de legalidad en el derecho internacional	32
a.5. Manifestaciones del principio de legalidad	33
a.6. Garantías o contenido del principio de legalidad	38

b.	Principio de coherencia normativa	40
b.1.	Definición de principio de coherencia normativa	40
b.2.	Características del principio de coherencia normativa	40
b.3.	Vulneración al principio de coherencia normativa	41
c.	Leyes penales en blanco	42
c.1.	Definición de leyes penales en blanco	42
c.2.	Clasificación de las leyes penales en blanco	43
c.3.	Características de las leyes penales en blanco	44
c.4.	Requisitos de las leyes penales en blanco	45
c.5.	Jurisprudencia de las leyes penales en blanco	46
d.	Los tipos penales básicos, autónomos y derivados	47
e.	El principio de legalidad y su aplicación en los delitos	49
2 3.2.	INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL	50
	EN EL HURTO AGRAVADO	
a.	Interpretación de la ley penal	50
a.1.	Problemáticas de la interpretación de la ley penal	51
a.2.	La perspectiva de la interpretación de la ley penal	50
a.3.	Los límites a la interpretación de la ley penal	52
a.4.	Tipos de interpretación de la ley penal	53
b.	Funciones del tipo penal	58
b.1.	Vulneración a la función garantizadora de los tipos penales	60
c.	Prohibición de la analogía IN MALAM PARTEM	60
2.3.3.	EL DELITO DE HURTO AGRAVADO	60
a.	Definición de hurto agravado	60
b.	Alcances doctrinarios	61
c.	La configuración del hurto agravado en el derecho penal peruano	61
d.	El hurto y sus modalidades agravadas	65
e.	El valor del bien mueble en la tipificación del hurto	65
f.	Jurisprudencia del hurto agravado	66
g.	Derecho comparado del hurto agravado	68
2.3.4.	ANÁLISIS DEL ACUERDO PLENARIO N° 004-2011-CJ-116	72
	EN EL MARCO DEL DERECHO PENAL PERUANO	
a.	Contexto del Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116	72

b. Fundamentos del Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116	72
c. La relevancia del valor del bien mueble en el delito de hurto agravado en la jurisprudencia de la corte suprema	72
d. Implicaciones dogmáticas y política criminal	75
e. El valor del bien mueble hurtado	75
f. Fundamentos establecidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116	76
2.4. MODELO TEÓRICO	83
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	84
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	85
3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN	87
3.2.1. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN	87
3.2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA	88
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	88
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA	89
3.4.1. POBLACIÓN	89
3.4.2. MUESTRA	89
3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES	90
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	92
3.6.1. TÉCNICAS	92
3.6.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	93
3.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS	94
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	96
4.1. RESULTADOS	97
4.2. DISCUSIÓN	102
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	118
5.1. CONCLUSIONES	119
5.2. RECOMENDACIONES	121
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	123
ANEXOS	133

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar las inconsistencias del concepto de la "autonomía operativa" del delito de Hurto Agravado instituidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 en base al método de interpretación extensiva. Concluyendo que el análisis del concepto de “autonomía operativa” del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 evidencia inconsistencias que vulneran el principio de legalidad, al generar una cláusula indeterminada que afecta la claridad normativa, advirtiendo una ruptura de la coherencia interna del Código Penal al desvincular el hurto agravado de su tipo base y omitir la cuantía como elemento esencial, confirmando la existencia de una laguna normativa en el artículo 444°, cuya corrección resulta.

Palabras claves: Autonomía operativa, hurto agravado, acuerdo plenario, Coherencia normativa, principio de legalidad

ABSTRACT

The main objective of this research is to analyze the inconsistencies in the concept of "operational autonomy" for the crime of aggravated theft, as established as legal doctrine in Plenary Agreement 04-2011/CJ-116, based on the method of extensive interpretation. The analysis concludes that the concept of "operational autonomy" in Plenary Agreement 04-2011/CJ-116 reveals inconsistencies that violate the principle of legality. These inconsistencies create an indeterminate clause that affects normative clarity, revealing a break in the internal coherence of the Penal Code by decoupling aggravated theft from its basic type and omitting the quantity as an essential element. This confirms the existence of a normative gap in Article 444, which must be corrected.

Keywords: Operational autonomy, aggravated theft, plenary agreement, regulatory coherence, principle of legality

CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El objeto de estudio de la presente investigación se centra en el análisis crítico del concepto de “autonomía operativa” del delito de hurto agravado, instaurado como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, donde este concepto surge como una construcción jurisprudencial que pretende desvincular las agravantes del hurto del requisito cuantitativo previsto en el artículo 444° del Código Penal, otorgándoles un funcionamiento independiente respecto del hurto simple, sin embargo, tal autonomía genera tensiones interpretativas y dogmáticas relacionadas con el principio de legalidad, la coherencia normativa del sistema penal y la naturaleza derivada del hurto agravado, en este sentido, el estudio se centra en identificar las inconsistencias internas de dicha construcción jurisprudencial y evaluar si su aplicación resulta compatible con la estructura sistemática del tipo penal.

Del mismo modo, el objeto de estudio se proyecta al ámbito del Derecho comparado, donde diversos ordenamientos regulan el hurto agravado sin recurrir a una autonomía conceptual semejante a la reconocida en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116. Como señala Arbulú (2019), países como Argentina, Alemania, Brasil, España e Italia estructuran sus agravantes sobre criterios objetivos, violencia, irrupción en inmueble habitado, uso de herramientas especializadas o afectación de bienes culturales, manteniendo siempre la conexión dogmática con el tipo base, donde esta coherencia normativa evita la creación de categorías imprecisas y refuerza el respeto al principio de legalidad, en contraste, la “autonomía operativa” peruana constituye una excepción que carece de respaldo comparado, lo que evidencia la necesidad de examinar críticamente sus fundamentos y su compatibilidad con la teoría del delito.

De lo contenido en la norma penal, partimos de la base que existe el delito de hurto simple regulado en el artículo 185° del Código Penal, en el cual, se exige que, para su configuración e imputación penal, el valor del bien mueble hurtado debe superar el 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y en caso no se llegue a superar este umbral, se calificará como una falta contra el patrimonio, regulada en el artículo 444° del Código Penal.

Con lo antes expuesto, se advierte que no existiría mayor análisis en cuanto al artículo 185° del Código Penal, salvo los criterios de valoración del bien mueble para el artículo 186° del mismo cuerpo normativo, los cuales se encuentran establecidos en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, de fecha 06 de diciembre de 2011, donde se formula la creación del concepto de “autonomía operativa” respecto del delito de hurto agravado por los jueces de la Corte Suprema de la República, donde refieren que en la redacción normativa del artículo 444° del Código Penal, no se encuentra el artículo 186° del mismo código, por lo que, no se exige este criterio cuantitativo para el artículo en mención.

Del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, se desprende que, antes de la creación del mismo, existían discrepancias en cuanto a la aplicación del valor del bien mueble para las agravantes del hurto simple, por ello se llevó a la emisión del presente Acuerdo Plenario, pero marcado por dos posiciones opuestas, donde la primera es plantear la autonomía del delito de hurto agravado, respecto de la no exigencia del valor del bien objeto de delito regulado en el artículo 444° del Código Penal, en base al principio de legalidad.

Y, como segunda postura, refiere a la obligación de analizar y utilizar el valor del bien objeto de delito, para el delito de hurto agravado, en base al principio de ultima ratio y principio de legalidad, desde la perspectiva de la función garantizadora del tipo penal, puesto que el hurto agravado está supeditado a la concurrencia previa de todos los elementos del tipo del delito

de hurto simple, incluyendo al valor del bien objeto de delito delimitado en el artículo 444° del Código Penal.

Por ello, Infanzón et al. (2013) refieren que cuando una persona hurta un bien mueble de escaso valor, se ha cometido un delito contra el patrimonio, sin embargo, la pena de prisión no es la sanción adecuada para este tipo de delitos, ya que su desvalor jurídico es insignificante, al encontrarnos en un Estado constitucional de derecho, la intervención punitiva debe basarse en criterios de ponderación y proporcionalidad, pero en este caso, una pena de prisión sería desproporcionada.

Asimismo, refieren, Infanzón et al. (2023), el hecho que se tenga como precepto materia previo al delito de hurto simple, para hacer una distinción entre el tipo penal de hurto y la falta penal contra el patrimonio, hace que el hurto agravado se encuentre como un tipo penal derivado o dependiente del hurto simple; por ello se debe verificar, como primer requisito (p. 72). Y, siguiendo esta misma línea argumentativa, Muñoz y García argumentan sobre la tipicidad, ser un comportamiento que no implica la antijuricidad de este, pues, el tipo y la antijuridicidad son estratos distintos que se desprenden del delito (2010, p.250).

De lo antes advertido, el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, emite la decisión, acordando establecer como doctrina legal, los fundamentos del 9° al 12°, en la cual, se determina que para la configuración del delito de hurto agravado, no aplica la exigencia del elemento del valor del bien objeto de delito, pues, esta exigencia sólo está regulada para el delito de hurto simple, según la redacción normativa del artículo 444° del Código Penal; por lo que, el delito de hurto agravado tiene una suerte de autonomía operativa, respecto del hurto simple, en base al principio de legalidad.

De lo antes mencionado, se advierte que los jueces de la Corte Suprema de la República en el Acuerdo Plenario, no han utilizado una interpretación extensiva al artículo 444° del Código Penal, toda vez que, el artículo 186° son circunstancias agravantes del tipo penal

base, para lo cual debe cumplir con todos los elementos del tipo incluido el elemento del valor del bien objeto de delito, además de, crear una cláusula legal indeterminada concretizada en el concepto de “autonomía operativa” del delito de hurto agravado, la cual se encuentra prohibida en nuestro sistema normativo nacional, según lo precisado por el Tribunal Constitucional (2011) en la sentencia del Exp. N° 01469-2011-PHC/TC.

Por todo lo manifestado, la caracterización del problema se sustenta en la identificación de diversas inconsistencias derivadas del concepto de “autonomía operativa” del hurto agravado, introducido por el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, donde en primer lugar, dicha autonomía rompe la coherencia normativa del sistema penal, al desvincular las agravantes del artículo 186° de los elementos esenciales del hurto simple, pese a que dogmáticamente constituyen un tipo derivado y dependiente, asimismo, se advierte una vulneración al principio de legalidad, pues la exclusión del valor del bien como elemento típico genera una cláusula legal indeterminada prohibida por la jurisprudencia constitucional, por otro lado, se compromete la función garantizadora del tipo penal, al permitir que conductas de mínima lesividad sean calificadas como delito agravado sin criterios objetivos de cuantía, finalmente, se evidencia un tratamiento desigual frente a la regulación de las faltas patrimoniales previstas en el artículo 444°, con lo cual se produce una ruptura en la lógica sistemática del legislador. Estas inconsistencias fundamentan la necesidad de revisar críticamente la validez dogmática y normativa del concepto de autonomía operativa.

De lo anterior se desprende la siguiente interrogante:

¿Cuáles son las inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116?

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo general

Analizar las inconsistencias del concepto de la “autonomía operativa” del delito de Hurto Agravado instituidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 en base al método de interpretación extensiva.

1.2.2. Objetivos específicos

Contrastar que el concepto de “autonomía operativa” del hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, depende de la concurrencia de la cuantía del bien hurtado como elemento normativo del tipo penal, para el delito de hurto agravado.

Analizar el concepto de “autonomía operativa” del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, como dependencia de la concurrencia previa del delito de hurto simple.

Describir las inconsistencias del concepto de “autonomía operativa” del delito de hurto agravado establecida en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, a partir del análisis de la interpretación doctrinal y extensiva.

Proponer la modificación de la redacción normativa del artículo 444° del Código Penal, incluyendo en su redacción, al artículo 186° del mismo código.

1.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Debido a que, el concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado establecido como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 es inconsistente interpretativamente, es probable que este no tenga sustento en base al método de interpretación extensiva, vulnerando la forma de redacción como tipo penal derivado del delito de hurto agravado.

1.4. JUSITIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación es relevante porque servirá a los operadores jurídicos el poder

determinar la inconsistencia del concepto de la autonomía operativa del delito de hurto agravado que se plantea en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, en base a la interpretación extensiva y sistemática del Código Penal y a la utilización de la dogmática penal, pues, al no realizar una correcta conceptualización de la autonomía operativa del hurto agravado se produce el incumplimiento de los elementos del tipo penal base, toda vez que, los abogados defensores lo podrán utilizar para identificar la vulneración del derecho de defensa del investigado y la violación a la estructura del tipo penal de hurto simple con el tipo de falta contra el patrimonio, pues se le otorga una condición de autonomía operativa al hurto agravado.

Es más, la presente investigación tiene utilidad práctica, pues es necesaria para la comunidad jurídica y para los operadores jurídicos, porque ayudó a establecer un parámetro objetivo y legal, para la aplicación de las agravantes de hurto simple, ante la inconcurrencia del valor exigido por la norma penal, con lo cual, los beneficiarios de esta solución a la laguna normativa del artículo 444° del Código Penal, son quienes se encuentran bajo el dominio nacional.

Así, a nivel dogmático, se pudo determinar que el concepto de autonomía operativa es una ficción jurídica sin medición objetiva, por razones de política criminal, establecidas en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116.

Por ello, la investigación tiene utilidad metodológica, se aplicó el método científico para verificar la hipótesis y se utilizaron técnicas e instrumentos para recolectar y obtener datos y determinar la inconsistencia conceptual de la autonomía operativa, establecida como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116.

CAPITULO II:

MARCO TEÓRICO

II. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

A NIVEL INTERNACIONAL

Simmons (2025) en su investigación “Criminal behavior responses to changing penalties: Estimating the impact of felony theft threshold changes” para optar el grado de magister en la Clemson University tuvo como objetivo estimar el impacto de los cambios en los umbrales de delitos de hurto, específicamente a través del estudio de la Proposition 47 en California. Donde se llegó a concluir que la variabilidad en los umbrales de los delitos y las sanciones tiene un impacto profundo en la percepción de los infractores y en la administración de la justicia. Los umbrales establecidos para determinar la gravedad de un delito afectan tanto la conducta de los acusados como la actuación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Cuando estos umbrales no son claros o son arbitrarios, se corre el riesgo de aplicar sanciones desproporcionadas o injustas, afectando la efectividad del sistema penal. Así, se resalta la importancia de establecer umbrales objetivos y bien definidos, que aseguren una respuesta penal justa, proporcional y alineada con el principio de legalidad, evitando interpretaciones extensivas que puedan comprometer la certeza jurídica y la coherencia normativa.

A NIVEL NACIONAL

Ahora bien, en el trabajo de investigación de Talledo (2022) titulada “Controversia de criterios de la cuantía y la percepción de impunidad del delito de hurto” (tesis de pregrado) Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Huacho. La cual tiene como objetivo general: Evaluar si las controversias de criterios de cuantía en jueces y fiscales para determinación el hurto contribuye a su impunidad delictiva, su metodología es de prototipo no experimental y de sesgo horizontal, de alcance práctico, enfoque cualitativo de análisis. Concluye que el 58% de la encuestada coincide al pensar que, lo previsto en el 186° CP es

similar a circunstancias agravantes que se subordinan al tipo penal base el artículo 185° CP. Una parte de la doctrina penal defiende la tesis de que, en el delito de hurto agravado, no es necesario establecer un valor mínimo para el bien sustraído, debido a la pluralidad de bienes jurídicos afectados por esta conducta. Ahora bien, coincidieron el 50% de los encuestados, que resulta complejo determinar el tipo penal agravado en cuanto al valor patrimonial económico del bien mueble sustraído, siendo que, no tienen postura interpretativa única.

A la vez, en el trabajo de investigación de Castañeda (2020) titulado “La cuantía en el delito de hurto agravado” (tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán. Pimentel. Tiene como objetivo general: Plantear la reformulación de los tipos penales de hurto agravado, refiere que, desde una perspectiva dogmática y manejando el criterio de que el hurto agravado es complementario y dependiente del hurto básico, es una investigación básica y aplicada. Concluye que las agravantes del delito de hurto deberían mencionarse en la cuantía fijada en el artículo 444 del Código Penal, asimismo, los criterios de interpretación restrictiva y el principio de significancia económica sustentan los argumentos presentados en esta tesis, particularmente en lo referente a la valoración de las circunstancias agravantes

Asimismo, se tiene a Bayona (2018) con su tesis de maestría titulada “El valor del bien mueble como condición objetiva de punibilidad, y su aplicación en el artículo 186° del Código Penal a propósito del Acuerdo Plenario 004-2011” (tesis de maestría). Universidad de Piura. Piura. Tiene como objetivo general: considerar la cuantía como condición objetiva de punibilidad, su metodología es descriptivo e interpretativo; siendo así, el presente trabajo de investigación concluye que, el Acuerdo Plenario 004-2011, la iniciativa es bien intencionada, pero su justificación jurídica es débil ante el principio de legalidad, en contraste con la concepción del 'quantum' como un elemento objetivo de la punibilidad.

Por su parte Medina (2018) en su investigación titulada “La vulneración del principio de lesividad en el hurto agravado por la determinación de la cuantía en el Perú” (tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Lima. Tiene como objetivo general: Establecer cómo se vulnera el principio de lesividad en la aplicación del tipo penal de hurto agravado, por determinación de la cuantía, es una investigación básica y aplicada, además, una de sus principales conclusiones que la política de endurecimiento de penas no ha permitido reducir el alto índice de delitos de hurto. Uno de los indicadores para darlo es obedece a las dificultades frecuentes de la investigación fiscal y judicial al meritar si lo hurtado sobrepasa una remuneración mínima vital, para constituirse en delito de hurto simple.

Rentería y Tello (2016), en su tesis de pregrado titulada “La cuantía como elemento objetivo para la tipificación del delito de hurto agravado” (tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán. Pimentel. Tiene como objetivo general: Analizar el artículo 186 del Código Penal Peruano, el tipo de investigación es: aplicada, explicativa y causal; en el presente trabajo de investigación concluyen que sobreviene un debate en el ámbito jurídico sobre la adecuada interpretación del artículo 186 del Código Penal, el cual prescribe el delito de Hurto Agravado. La controversia surge porque el artículo 444° del mismo código solo menciona la aplicación de las faltas contra el patrimonio al hurto simple y a los daños, sin especificar si el valor del bien sustraído debe ser considerado para tipificar el Hurto Agravado, el cual depende del tipo base.

2.3. BASES TEÓRICAS

A continuación, se hace mención las bases teóricas que sustentan el desarrollo de la presente investigación:

Principio de legalidad:

Hilgendorf y Brian (2017) señalan:

En lo que se refiere al principio de legalidad, se trata de un principio básico, al que un Estado de Derecho no puede renunciar: cada ciudadano tiene que estar en condiciones de reconocer por anticipado cuáles serían las acciones por las cuales el sería punible. El Estado no puede privar de su libertad arbitrariamente a sus ciudadanos por una conducta que no esté en absoluto abarcada por la ley (penal) (p. 16)

Principio de coherencia normativa:

Autores como Vallejo (2018) sostiene que el principio de coherencia normativa establece que las normas jurídicas no deben contradecirse entre sí, garantizando unidad lógica en el sistema, no obstante, esta coherencia no es una cualidad automática de las leyes creadas por el legislador, es una propiedad material que los intérpretes del derecho deben construir mediante la ciencia jurídica, al aplicar criterios de logicidad en la interpretación y producción de normas jurídicas.

Teoría objetiva de la interpretación de la ley penal

Pablos (2012) sostiene que la teoría objetiva de la interpretación de la ley penal sostiene que el objetivo del intérprete es descubrir la voluntad de la ley (ratio legis), no la del legislador histórico (voluntas legislatoris), esta teoría parte de la premisa de que las leyes, una vez promulgadas y en vigor, se independizan de la intención del legislador y se aplican en contextos sociales, económicos o políticos que pueden diferir de los originales. Así, la interpretación debe adaptarse a los cambios en la sociedad y al objetivo general de la ley en el contexto actual, garantizando una aplicación dinámica y evolutiva que respete los principios del ordenamiento jurídico.

Teoría subjetiva de la interpretación de la ley penal

La teoría subjetiva de la interpretación se centra en la intención del legislador al momento de crear la ley, buscando entender la voluntas legislatoris, es decir, la voluntad del legislador histórico. Esta teoría sostiene que el intérprete debe identificar lo que los legisladores pretendían con la norma en su contexto original, asumiendo que dicha voluntad debe prevalecer. Aunque ha sido defendida por algunos, esta visión ha sido desplazada en gran medida por la teoría objetiva, debido a la complejidad de determinar una voluntad legislativa clara en un sistema democrático actual, donde las leyes responden más a acuerdos políticos y concesiones que a la intención unívoca de los legisladores (Pablos, 2012).

2.3. MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y COHERENCIA NORMATIVA

a. Definición de principio de legalidad

Autores como García (2025) señalan que el principio de legalidad establece que nadie puede ser sancionado penalmente por un acto que no esté previsto de manera previa por la ley como delito o con una pena no establecida en ella.

Según lo precisado por el Tribunal Constitucional (2011) en la sentencia del Exp. 01469-2011-PHC/TC, señala que el principio de legalidad prohíbe la creación de “clausulas legales indeterminadas”.

En este sentido, el principio de legalidad asegura la objetividad, ya que las acciones susceptibles de sanción deben estar claramente descritas en la ley. Como señala Caro y Reyna (2023), este principio “impone al legislador la obligación de formular de manera clara y precisa las conductas que decide tipificar, es decir, la ley penal no

debe generar ambigüedades en su aplicación, evitando así la actuación arbitraria del juzgador” (p. 141).

En atención a las diferentes definiciones, se verifica que el principio de legalidad es esencial para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que establece límites claros a la acción punitiva del Estado, al exigir que las conductas delictivas estén previamente tipificadas en la ley, se evita cualquier actuación arbitraria y se asegura que las personas conozcan, de antemano, las consecuencias legales de sus acciones.

a.1. Función del principio de legalidad

Álvarez (2015) manifiesta que el principio de legalidad en el sistema penal asegura que la potestad punitiva del Estado se ejerza conforme a la ley, lo cual es un mandato del sistema político adoptado por la sociedad, donde su función dentro del derecho penal tiene dos enfoques posibles, un sector de la doctrina sostiene que la función principal del derecho penal es la prevención de conductas que lesionen bienes jurídicos. Según este enfoque, el principio de legalidad actúa como un mecanismo que orienta el comportamiento de los ciudadanos al establecer con claridad qué conductas son ilícitas y cuáles son las penas aplicables. La certeza de las consecuencias legales permite a los individuos tomar decisiones racionales sobre sus actos, evitando conductas ilegales.

Por otro lado, hay quienes consideran que la función del derecho penal no es solo motivar la conducta, sino asegurar que se mantenga el orden normativo en la sociedad, según esta perspectiva, el principio de legalidad tiene la función de garantizar la restauración del orden social cuando una norma es defraudada por un delito. En este enfoque, corresponde al Poder Legislativo

definir con precisión qué expectativas sociales deben ser protegidas por el derecho penal, y solo este poder tiene la capacidad de concretar qué normas deben restablecerse en caso de violación. Los jueces, según este modelo, deben aplicarlas de manera objetiva, basándose en las leyes previas aprobadas por el legislador, sin posibilidad de modificar la aplicación de las normas según su interpretación personal (Álvarez, 2015).

a.2. Fundamento constitucional del principio de legalidad

García (2025) señala que el principio de legalidad está consagrado en la Constitución Política del Perú, específicamente en el artículo 2, inciso 24, literal d), que garantiza que nadie puede ser procesado ni condenado por actos u omisiones que, en el momento de su realización, no estén previamente establecidos de forma expresa e inequívoca como infracciones punibles por la ley. Este principio asegura que la potestad punitiva del Estado esté delimitada de manera clara, evitando que las decisiones judiciales estén influenciadas por intereses subjetivos o políticos.

El principio de legalidad no solo protege a los individuos del abuso del poder estatal, sino que también refuerza el sistema democrático al limitar la potestad punitiva a la ley aprobada por un Congreso elegido democráticamente. Este principio refleja la soberanía popular y permite la representación de las minorías. Actúa como un control para evitar el abuso del poder, dividiendo la potestad entre los legisladores, quienes definen las conductas punibles, y los jueces, quienes imponen las sanciones. Aunque esencial en el sistema constitucional, teorías alternativas podrían permitir mayor discrecionalidad a los jueces en la definición de delitos, siempre con el objetivo de prevenir abusos y proteger los derechos ciudadanos (García, 2025).

a.3. Justificación jurídico-política y justificación jurídico-penal del principio de legalidad

El principio de legalidad se justifica tanto desde un enfoque jurídico-político como jurídico-penal, siendo necesario reconocer ambas dimensiones para comprender su verdadero alcance, sobre ello, según Caro y Reyna (2023), esta legitimación debe considerar tanto los aspectos ideológico-políticos como los técnicos-penales, destacando:

Justificación Jurídico-Política: Garantía de Libertad del Ciudadano: El principio de legalidad garantiza la libertad individual frente al abuso del poder estatal. Montesquieu y Liszt destacan que la libertad depende de leyes criminales justas. Este principio protege a los ciudadanos de posibles arbitrariedades del Estado, asegurando que las leyes sean claras y conocidas. Su fundamento radica en el liberalismo político, que surgió de la Ilustración, y establece la necesidad de la división de poderes para prevenir abusos. Así, el poder legislativo, elegido por el pueblo, tiene la tarea de crear leyes que representen los intereses de la mayoría, sin olvidar los de las minorías, asegurando la libertad individual dentro de un sistema político controlado por los ciudadanos.

Justificación Jurídico-Política: Garantía de la División de Poderes: El principio de legalidad promueve la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La creación de leyes penales debe recaer en los legisladores, representantes del pueblo, para evitar el abuso de poder por parte del Ejecutivo o los jueces. Esta división permite un contrapeso entre los poderes del Estado, garantizando que

las leyes reflejen los intereses generales sin excluir a las minorías. De esta forma, el principio de legalidad asegura que las leyes sean creadas a través de un proceso formal en el que las mayorías participen, pero sin perjudicar los derechos de las minorías.

Justificación Jurídico-Penal: Mecanismo de Prevención: Desde la perspectiva de Feuerbach, el principio de legalidad actúa como un mecanismo de coacción psicológica. La certeza de que una infracción conlleva una pena disuade a los individuos de cometer delitos. El principio de legalidad tiene una función preventiva al hacer que los ciudadanos conozcan las consecuencias legales de sus actos, inhibiéndolos de cometer delitos. La amenaza de la pena, clara y definida, juega un papel crucial en la prevención del crimen al hacer que los ciudadanos sean conscientes de los efectos negativos que seguirían a sus actos ilícitos.

Justificación Jurídico-Penal: Expresión del Principio de Culpabilidad: La legitimación del principio de legalidad también se justifica a través del principio de culpabilidad, que establece que una persona solo debe ser castigada si su conducta es culpable. Para que esto sea posible, la ley debe existir previamente y ser conocida por el autor del delito. El principio de legalidad asegura que la imposición de una pena solo ocurra cuando el acto sea claramente ilegal, garantizando que el autor del delito haya tenido la oportunidad de conocer la antijuridicidad de su comportamiento. Esto refuerza la idea de que la pena debe estar vinculada a la culpabilidad del infractor, respetando su derecho a la seguridad jurídica (pp. 124-127).

De la información proporcionada, se verifica que el principio de legalidad es esencial para proteger la libertad individual y evitar el abuso del poder estatal, asegura que las leyes sean claras, conocidas y creadas por representantes del pueblo, garantizando la seguridad jurídica de los ciudadanos, además, al vincular la pena con la culpabilidad del infractor, respeta los derechos fundamentales y previene la arbitrariedad en el sistema penal.

a.4. El principio de legalidad en el derecho internacional

Ampuero (2018) sostiene que el principio de legalidad en el derecho internacional se configura como un principio fundamental tanto en el derecho penal nacional como en el internacional. En el ámbito internacional, este principio se entiende en términos más amplios, abarcando las conductas delictivas no solo del derecho interno de los Estados, sino también aquellas tipificadas en el derecho internacional, el mismo es esencial para combatir la impunidad, asegurando que los crímenes internacionales, aunque no tipificados en la legislación nacional, puedan ser juzgados por tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, este enfoque refleja una evolución del principio, adaptado a las necesidades del derecho internacional, especialmente en la protección de los derechos humanos.

La jurisprudencia de los tribunales internacionales, como los juicios de Nüremberg, mostró que el principio de legalidad en el derecho penal internacional no se limita a las leyes nacionales, sino que también incluye normas consuetudinarias internacionales. Esto permitió que crímenes cometidos antes de su tipificación explícita fueran juzgados bajo la normativa internacional existente en ese momento, de esta manera, el principio de legalidad en el derecho internacional se distingue del derecho penal interno,

ya que no siempre requiere una ley escrita previa, sino que también puede basarse en la costumbre y acuerdos internacionales (Tena, 2014).

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional amplía este principio al incluir crímenes internacionales que, aunque no estén específicamente detallados en el estatuto, son reconocidos por el derecho internacional, esto garantiza que las violaciones graves de derechos humanos sean procesadas, incluso en ausencia de legislación interna específica, reforzando la idea de que el principio de legalidad en el ámbito internacional no está limitado al derecho nacional, sino que también integra normas internacionales para proteger los derechos fundamentales y garantizar la justicia global (Ampuero, 2018).

a.5. Manifestaciones del principio de legalidad

La doctrina penal acepta, que el principio de legalidad tiene cuatro formas de manifestación: La reserva de ley, el mandato de certeza o determinación, la ley previa y la prohibición de analogía, sobre ello García (2025) señala:

NULLUM CRIME SINE LEGE SCRIPTA - La reserva de ley (lex scripta): La reserva de ley establece que únicamente la ley puede crear delitos y establecer penas, excluyendo otras fuentes como la costumbre o la jurisprudencia. La ley en sentido formal, elaborada por el Congreso, es la base para tipificar delitos y penas. En algunos países, como España, se requiere una ley orgánica para regular ciertos delitos, pero en Perú, una ley ordinaria es suficiente. Además, se considera que decretos legislativos y decretos leyes también cumplen con la reserva de ley, siempre que sean aprobados dentro del marco constitucional, en especial en situaciones de gobierno especial. El concepto de ley penal se extiende a decretos que

tienen rango de ley, aunque algunos cuestionan si decretos de urgencia pueden ser utilizados para regular delitos.

Según refiere Almanza (2022), no se puede sancionar de ninguna manera ni crear delitos basados en la costumbre legal. A causa de este subprincipio, queda excluido el derecho consuetudinario para calificar los actos delictuosos y fijar la pena correspondiente a los responsables (p. 51).

NULLUM CRIME SINE LEGE CERTA - La taxatividad de la ley (lex certa): El principio de legalidad obliga al legislador a precisar las conductas delictivas y las penas de manera clara. Esta taxatividad es esencial para evitar abusos judiciales y garantizar la seguridad jurídica. La ley penal debe ser suficientemente precisa para que no se deje espacio a la interpretación arbitraria. Aunque se exige claridad, la ley penal no necesita ser completamente detallada en todos los casos, ya que algunos aspectos específicos se dejan a la interpretación judicial. En situaciones complejas o cambiantes, como las económicas, se permite cierta flexibilidad en la tipificación de delitos, pero siempre con un control para evitar que se afecten derechos fundamentales.

El mandato de certeza garantiza que los ciudadanos conozcan las conductas delictivas y sus sanciones, evitando la arbitrariedad judicial en la calificación de delitos. Sin embargo, la ley penal no puede cubrir todas las situaciones, por lo que se requiere una evaluación caso por caso. La flexibilización del mandato de certeza, mediante cláusulas generales o referencias a leyes extrapenales, permite adaptar el derecho penal a

nuevas realidades, siempre que no se contravenga el principio de determinación y se evite la arbitrariedad.

En dicho principio, conforme refiere Almanza (2022), la norma debe ser lo bastante clara para que cualquiera pueda entenderla. Esto significa que las normas deben ser precisas, específicas y describir exactamente para que los destinatarios sepan cuáles son los actos incriminados y la sanción que les corresponde.

Para García (2022), este mandato de certeza:

(...) impone al legislador la obligación de precisar en la ley todos los elementos constitutivos de la conducta penalmente sancionada y la pena a imponer. (...) Al legislador le corresponderá establecer, de manera general, los elementos constitutivos de la forma de actuación defraudatoria de la norma y el marco abstracto de la pena a imponerlo (...) (p. 159).

Principio de taxatividad:

El principio de taxatividad, según Támara (2020), es una extensión del principio de legalidad y establece que las conductas punibles y las penas deben estar claramente definidas por la ley, sin ambigüedades. Este principio se deriva del artículo 2, inciso 24, literal a), de la Constitución, que garantiza a los ciudadanos que solo estarán sujetos a lo que la ley establece. La ley penal debe ser escrita de manera clara y precisa, utilizando un lenguaje accesible que cualquier persona pueda comprender, sin tecnicismos o términos vagos, para evitar

interpretaciones diversas o arbitrarias que puedan generar inseguridad jurídica.

Además, el principio de taxatividad protege contra interpretaciones subjetivas y arbitrarias de la ley penal, asegurando que no se apliquen sanciones sin una base legal clara y preexistente. La ley penal debe ser objetiva, clara y precisa, lo que facilita su cumplimiento y garantiza la certeza jurídica. De esta forma, se previene el abuso del poder punitivo del Estado, permitiendo que la ley se perciba de manera efectiva y sin margen para su manipulación, asegurando que los fines del derecho penal sean alcanzados de manera justa y equitativa (Támara, 2020). Así mismo, teniendo en cuenta la Casación N° 87-2011-Arequipa, señala que el principio de máxima taxatividad exige al legislador que agote los recursos técnicos para otorgar la mayor precisión posible a su obra y, de otro lado, se prohíbe la creación de cláusulas legales indeterminadas (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011).

De lo señalado por diversos autores, se considera que el principio de taxatividad es fundamental para garantizar que las leyes penales sean claras y precisas, evitando interpretaciones subjetivas que puedan generar inseguridad jurídica, dado que este principio protege a los ciudadanos de sanciones arbitrarias y asegura que solo se sancionen conductas claramente tipificadas en la ley y de esta manera se refuerza la certeza jurídica y se previene el abuso del poder punitivo del Estado.

NULLUM CRIME SINE LEGE PREVIA - La prohibición de retroactividad (*lex praevia*): El principio de irretroactividad establece que una ley penal no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su

promulgación, ni imponer penas no previstas por la ley en su momento. Esta manifestación del principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica y evita que las personas sean sancionadas por actos que no eran delitos en el momento de su comisión. Sin embargo, existe una excepción para retroactividad benigna, en la que una ley posterior más favorable al reo puede aplicarse retroactivamente. Este principio asegura que las leyes penales sean claras y predecibles, protegiendo los derechos fundamentales de los individuos.

Conforme nos señala Almanza (2022), este principio consiste en la irretroactividad de la norma penal. Por regla, las normas se deben aplicar inmediatamente, es decir, al día siguiente de su publicación en El Peruano.

NULLUM CRIME SINE LEGE STRICTA - La prohibición de analogía (lex stricta): La prohibición de analogía impide que los jueces utilicen el razonamiento analógico para sancionar conductas no tipificadas en la ley penal o para agravar penas sin base legal. El artículo 139 de la Constitución Política y el Código Penal prohíben que los jueces amplíen el alcance de la ley mediante la analogía, ya que esto podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se busca que la interpretación de la ley penal se ajuste al tenor literal y no se base en interpretaciones que modifiquen el alcance del tipo penal. Las decisiones judiciales deben estar fundamentadas en la ley, no en analogías que alteren su aplicación (pp. 143-173).

El subprincipio consiste en la garantía de prohibición de analogía, el cual va dirigido a los jueces, a fin de que no apliquen analogía en el ámbito

penal, toda vez que, los jueces aplican analogías usualmente para resolver lagunas jurídicas, pero en el derecho penal no se puede usar analogía cuando es desventajosa para el reo (Almanza, 2022).

En base a lo señalado por diversos autores, se evidencia que el principio de legalidad es esencial para garantizar un sistema de justicia claro y predecible, protegiendo así los derechos fundamentales del ciudadano, donde las manifestaciones de este principio, como la reserva de ley y la prohibición de analogía, aseguran que el poder punitivo del Estado se limite a lo expresamente establecido en la ley, evitando interpretaciones arbitrarias, esto permite reforzar la seguridad jurídica y la protección de la libertad individual, evitando abusos del poder estatal.

a.6. Garantías o contenido del principio de legalidad

El principio de legalidad es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad estatal, donde a través de sus diversas garantías, asegura que el poder punitivo del Estado se ejerza dentro de un marco legal preestablecido, evitando la incertidumbre y la injusticia, sobre ello Delgado (2020) identifica:

La garantía criminal: Asegura que no se puede sancionar una conducta como delito a menos que esté previamente definida como tal en una ley escrita y promulgada. Este principio se refleja en el axioma *nullum crimen, nulla poena sine lege*, que establece que no se puede castigar a alguien por un acto que no haya sido tipificado antes como delito. Además, la garantía criminal prohíbe la retroactividad de las leyes penales perjudiciales, garantizando que la base del castigo sea una ley anterior al

delito, asegurando la certeza jurídica y protegiendo al ciudadano de leyes punitivas imprevistas.

La garantía penal: La garantía penal asegura que el Estado no puede imponer penas que no estén previamente previstas para un tipo de delito determinado, ni modificar la naturaleza o duración de la pena de manera arbitraria. La pena debe ser proporcional al delito cometido y debe estar claramente determinada en la ley, este principio garantiza que el poder punitivo del Estado se limite a lo que la ley expresa, asegurando que las sanciones sean aplicadas dentro de un marco legal preestablecido y no bajo decisiones arbitrarias.

La garantía de ejecución: La garantía de ejecución establece que la pena debe cumplirse exactamente según lo previsto por la ley, sin que se pueda alterar su forma de ejecución. Esto implica que las penas deben aplicarse de acuerdo con los métodos y procedimientos establecidos por la norma penal, asegurando que el castigo sea proporcional al delito y respetuoso de los derechos del acusado. En el contexto de las leyes penales en blanco, esta garantía requiere que el reenvío normativo a otra ley o reglamento sea claro y específico para evitar confusiones en la aplicación de la pena.

La garantía jurisdiccional: La garantía jurisdiccional asegura que solo los tribunales competentes, y no otras entidades, pueden dictar sentencias condenatorias o absolutorias, garantizando que el proceso judicial se lleve a cabo según las normas procesales vigentes. Esta garantía refuerza el principio de legalidad, asegurando que las penas y medidas de seguridad sean impuestas exclusivamente por los tribunales de justicia previamente

establecidos, protegiendo el derecho a un juicio justo y evitando que otros actores intervengan en el proceso de condena o absolución (pp. 41-42)

b. Principio de coherencia normativa

b.1. Definición de principio de coherencia normativa

El principio de coherencia normativa, establece que no deben existir conflictos, contrariedad o antinomias entre normas jurídicas pues estas son consecuencia de la actividad interpretativa que implica observar mínimos criterios de logicidad; sin embargo, esta situación no necesariamente se predica en la actividad legislativa productora de dispositivos normativos. (Rodilla, 2009)

Así mismo según el Tribunal Constitucional (2006), en el Pleno Jurisdiccional, Exp.047-2004-AI/TC, el principio de coherencia normativa, significa: “la existencia de la unidad sistémica del orden jurídico, lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas que lo conforman”. En base a las definiciones señaladas, se determina que el principio de coherencia normativa es esencial para garantizar que el sistema jurídico funcione de manera lógica y armoniosa, dado que la ausencia de contradicciones entre las normas jurídicas no solo facilita su aplicación, sino que también refuerza la credibilidad del sistema de justicia.

b.2. Características del principio de coherencia normativa

El principio de coherencia normativa se caracteriza por la necesidad de que las normas jurídicas sean consistentes y se integren de manera lógica dentro del sistema legal. Este principio asegura que las disposiciones legales no se contradigan entre sí, promoviendo una armonía en el ordenamiento jurídico. Además, implica que las normas sean claras y precisas, de modo que los

ciudadanos puedan entender y cumplir las leyes sin ambigüedades. La coherencia normativa también exige que las reformas legales se realicen de forma sistemática, respetando la estructura y los principios fundamentales del sistema legal existente. De esta manera, el principio de coherencia normativa busca garantizar la estabilidad y la predictibilidad en la aplicación del derecho (Trujillo, 2020).

Navarro (2022) señala que el principio de coherencia normativa también se caracteriza por la integración de normas, lo que significa que todas las disposiciones dentro de un sistema jurídico deben estar interconectadas y complementarse entre sí, formando un conjunto armónico que sea comprensible en su totalidad, además, requiere que las normas sean razonables y lógicas en su aplicación, evitando contradicciones entre ellas para que las decisiones jurídicas se basen en un marco consistente y justo, este principio también asegura que las normas estén alineadas con los valores fundamentales del sistema jurídico, como la justicia y los derechos humanos, lo que mantiene la legitimidad del ordenamiento legal.

b.3. Vulneración al principio de coherencia normativa

El principio de coherencia normativa implica que las normas deben estar alineadas dentro del sistema jurídico de manera que no se contradigan entre sí, la interpretación extensiva puede vulnerar este principio si, al ampliar el alcance de una norma penal, se entra en contradicción con otros preceptos legales, como lo ocurrido con la interpretación del artículo 444 del Código Penal respecto al hurto agravado, este principio asegura que los tipos penales, cuando se modifican, no generen una descoordinación con los elementos legales previamente establecidos (Arbulú, 2019).

En base a lo señalado, la vulneración al principio de coherencia normativa ocurre cuando la interpretación extensiva desorganiza el sistema jurídico, generando contradicciones entre normas, por ello se considera esencial mantener la armonía entre los tipos penales para evitar conflictos legales que perjudiquen la seguridad jurídica.

c. Leyes penales en blanco

c.1. Definición de leyes penales en blanco

Las leyes penales en blanco son aquellas normas que están incompletas, es decir, los ciudadanos no tenemos la certeza de cuándo una conducta es punible o no. Es por eso que, una ley en blanco debe necesariamente remitirse a otra norma para que su entendimiento pleno pueda perfeccionarse (Delgado, 2020).

Por otro lado, Cevallos (2013) expresa:

Las leyes penales en blanco se presentan cuando determinadas disposiciones penales, de manera excepcional, no describen de forma completa los elementos concretos del supuesto de hecho, sino que delegan dicha determinación a otras normas o autoridades competentes, encargadas de precisar los aspectos que complementan la configuración del tipo penal (p.30).

Según lo señalado, se determina que las leyes penales en blanco crean incertidumbre al no especificar completamente los elementos de un delito, lo que dificulta la aplicación clara de la norma, siendo crucial que estas leyes se remitan a normas secundarias para asegurar una interpretación precisa y evitar arbitrariedades en su aplicación.

c.2. Clasificación de las leyes penales en blanco

Las leyes penales en blanco son aquellas que no definen completamente el delito o la pena, sino que remiten a normas externas para su especificación, siendo esta clasificación crucial para entender cómo se estructura la normativa penal en situaciones donde se requiere una legislación complementaria para completar el tipo penal, determinándose la siguiente clasificación:

Ley penal en blanco propia: La ley penal en blanco propia se refiere a aquellos tipos penales cuya definición de antijuricidad depende de normas de menor jerarquía, es decir, su complementación se delega a una instancia legislativa de nivel inferior. En estos casos, la ley penal base remite a otras disposiciones para determinar los elementos del delito (Caro y Reyna, 2019, p. 186)

Por otro lado, Delgado (2020) señala que la ley penal en blanco propia es aquella que, por su redacción, deja ciertos elementos del tipo penal indefinidos o incompletos, y requiere ser complementada por normas extrapenales, generalmente de rango inferior, para poder ser plenamente entendida y aplicada, donde en este tipo de leyes, el legislador no especifica completamente el supuesto de hecho o las consecuencias del delito, sino que remite a otras leyes o reglamentos para su desarrollo.

Ley penal en blanco impropia: Las leyes penales en blanco son aquellas en las que la definición de un delito depende de la integración de dos sistemas legislativos, en estos casos, la ilicitud del

comportamiento se establece mediante un reenvío a normas que provienen de la misma instancia legislativa. Este reenvío puede ser interno, cuando la antijuricidad se determina en base a disposiciones contenidas dentro del mismo cuerpo legal, o externo, cuando la remisión se hace a una norma de carácter formal proveniente de una legislación distinta (Caro y Reyna, 2019, p. 187).

c.3. Características de las leyes penales en blanco

González (2016) señala que las leyes penales en blanco se caracterizan por no contener una delimitación cerrada del supuesto de hecho típico, lo que implica que necesitan ser completadas por normas extrapenales para su correcta aplicación, estas leyes delegan en otras normativas el establecimiento de los elementos del tipo penal, lo que puede generar incertidumbre jurídica si no se define claramente qué norma debe completarla, estas leyes pueden no establecer los presupuestos ni las consecuencias del tipo penal, lo que abre la puerta a una interpretación amplia que podría sancionar cualquier conducta, además, estas normas permiten la remisión en bloque a otras leyes extrapenales, lo que puede afectar el principio de legalidad si no se establece claramente el supuesto de hecho y las consecuencias del delito.

Para que una ley penal en blanco sea válida y cumpla con el principio de legalidad, debe cumplir con ciertos requisitos. El núcleo esencial del tipo penal debe estar claramente precisado en la ley, y la remisión a la norma extrapenal debe ser expresa y justificada por el bien jurídico protegido, además, la norma extrapenal que completa el tipo debe estar vigente en el momento en que se comete el hecho punible, ya que, si no es así, se estaría

vulnerando la seguridad jurídica y el principio de legalidad temporal, en resumen, las leyes penales en blanco deben tener una remisión precisa y clara a una norma extrapenal, que cumpla con las exigencias de constitucionalidad y no ponga en riesgo la certeza jurídica (Delgado, 2020).

Sobre lo señalado, se determina que las leyes penales en blanco generan incertidumbre jurídica si no se definen claramente los elementos del tipo penal, ya que dependen de otras normas para completarse. Es fundamental que esta remisión sea precisa y clara, respetando el principio de legalidad, para evitar interpretaciones arbitrarias y proteger la seguridad jurídica.

c.4. Requisitos de las leyes penales en blanco

Las leyes penales en blanco requieren ciertos requisitos para garantizar su validez y efectividad en la tipificación de delitos, estos requisitos aseguran que, a través del reenvío normativo, la ley sea clara, precisa y no genere incertidumbre en su aplicación, determinándose los siguientes requisitos:

Necesidad de precisión del núcleo esencial en la ley penal en blanco:

El principio de legalidad exige que la ley penal sea clara y precisa para evitar la arbitrariedad. En las leyes penales en blanco, es fundamental que el núcleo esencial del tipo penal esté claramente definido, pues de lo contrario, no se podría sancionar una conducta que no esté debidamente tipificada. El Tribunal Constitucional Español y la Constitución Italiana subrayan que una ley debe especificar detalladamente los elementos constitutivos de delito para garantizar que el ciudadano pueda conocer de antemano las consecuencias de su conducta, asegurando así la seguridad jurídica y el respeto al principio de legalidad.

Necesidad de remisión normativa penal expresa: Las leyes penales en blanco deben incluir una remisión expresa a una norma penal específica que complemente los elementos del tipo penal, el legislador debe ser claro y preciso al indicar a qué norma se remite, ya que una remisión vaga o imprecisa violaría el principio de legalidad. Esta remisión debe ser limitada y bien coordinada para evitar inseguridad jurídica, asegurando que las leyes sean aplicadas correctamente. La remisión debe ser a una norma extrapenal específica que complete la definición del delito, lo que refuerza la protección del derecho penal y su coherencia (Delgado, 2020, pp. 28-29).

c.5. Jurisprudencia de las leyes penales en blanco

La jurisprudencia sobre las leyes penales en blanco en el Perú resalta la importancia del principio de legalidad y la necesidad de precisión en los tipos penales. El Tribunal Constitucional ha señalado que las leyes penales deben ser claras para garantizar que los ciudadanos conozcan las conductas que se consideran delitos, ya que una ley ambigua puede afectar la libertad de las personas. En la sentencia del 3 de enero de 2003 (Expediente N° 010-2002-AI/TC), se expresó que, aunque las leyes no pueden ser absolutamente precisas, deben proporcionar un marco claro que permita a los jueces aplicar la norma de manera consistente y predecible. En este contexto, las leyes penales en blanco pueden ser aceptables, pero deben ser usadas solo en casos complejos, donde la remisión a otras normativas esté claramente justificada, sin vulnerar el principio de legalidad (Tribunal Constitucional, 2003).

En cuanto a la Casación N° 738 – 2014, la Corte Suprema de Justicia (2014) enfatizó que la interpretación errónea de la ley penal, particularmente en relación con la definición de infracciones y las personas responsables, puede afectar gravemente la resolución de un caso. El Tribunal destacó que solo se deben sancionar las conductas expresamente previstas en el tipo penal, y que la ley debe delimitar claramente los comportamientos prohibidos. La jurisprudencia refuerza que las leyes penales en blanco, al ser normas sustantivas que remiten a otras leyes, deben cumplir con requisitos de claridad para garantizar la seguridad jurídica y evitar perjuicios en los derechos fundamentales de los ciudadanos (Delgado, 2020).

d. Los tipos penales básicos, autónomos y derivados

Los tipos penales se clasifican en básicos, autónomos y derivados, según su estructura y relación con otros tipos, esta clasificación determina cómo se tipifican y sancionan las conductas delictivas dentro del sistema jurídico, sobre ello se tiene:

Tipo penal básico: Los tipos básicos son aquellos que describen una conducta matriz que será la que identifique a la conducta delictiva, como «matar a otro» en el caso del homicidio (Prado, 2017)

Tipo penal autónomo: Conforme refiere García (2019):

“(…) Finalmente, los tipos penales autónomos, también llamados, *delictum sui generis* son aquellos que se derivan de otra figura delictiva, pero que adquieren autonomía en cuanto a la entidad de su injusto, desarrollando incluso sus propios tipos penales derivados. Por ejemplo, el delito de robo del artículo 189 del C P en relación con el delito de hurto” (pp. 397-398)

Por otro lado, Prado (2017) señala que los tipos penales especiales o autónomos describen conductas delictivas diferentes a las del tipo básico, pero que mantienen una relación indirecta con el bien jurídico protegido, los que se caracterizan por su especificidad y por no depender de tipos penales previos para su existencia.

De ello, se desprende que el tipo penal autónomo es aquel que está descrito en la ley de manera autónoma, con características propias y sin necesitar que se haya cometido otro delito para que se considere como tal.

Tipo penal derivado: Conforme refiere García (2019):

(...) El tipo penal básico establece los elementos esenciales de una figura delictiva. Por ejemplo, el delito de hurto simple del artículo 185 del CP establece como elementos esenciales de esta figura delictiva el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, la sustracción del lugar en que se encuentra y la finalidad de provecho. En relación con este tipo penal se pueden desarrollar tipos penales que, en atención a alguna particularidad, pueden agravar o atenuar la pena prevista en el tipo básico (por ejemplo, el hurto con destreza como supuesto agravado del artículo 186 inciso 3 del C P). En estos casos, el tipo penal derivado debe reunir necesariamente los elementos esenciales del tipo penal básico. (p. 397)

Los tipos penales derivados son aquellos que repiten la conducta delictiva del tipo básico, pero añaden circunstancias agravantes, como en el parricidio, o atenuantes, como en el infanticidio. Estos tipos pueden ser calificados o privilegiados, con una pena superior o inferior a la del tipo básico. Su

diferenciación se basa en la presencia de circunstancias que modifican la gravedad de la pena (Prado, 2017).

Se desprende de lo anterior que, un tipo penal derivado es una figura delictiva que surge a partir de un tipo básico o tipo base, añadiendo o modificando elementos que lo cualifican, agravan o atenúan. Es decir, se parte de un delito "principal" y se crea una nueva figura incorporando nuevas características que alteran la gravedad de la sanción o la forma en que se comete el delito.

e. El principio de legalidad y su aplicación en los delitos patrimoniales

En el contexto del hurto agravado, el principio de legalidad exige que los elementos que componen este delito estén claramente establecidos en la ley, sin ambigüedades. Este principio garantiza que las personas conozcan con antelación las conductas que son delictivas y las consecuencias legales de esas conductas. La falta de claridad en la tipificación del hurto agravado, especialmente en cuanto a la relación con el valor del bien sustraído, podría generar inseguridad jurídica y vulnerar el principio de legalidad. Es por esto que, según algunos doctrinarios, el legislador debería establecer criterios más precisos y objetivos para definir cuándo un hurto es agravado, basándose no solo en circunstancias como el abuso de confianza o la violencia, sino también en el valor del bien sustraído (Esquivel, 2011).

Por otro lado, Peña (2011) señala que, en el caso del hurto agravado, este principio asegura que las agravantes estén específicamente tipificadas y que las penas se impongan solo cuando se cumplan los requisitos legales. Se argumenta, que la cuantía del bien es un aspecto crucial para interpretar correctamente el hurto agravado, subrayando que, según el principio de legalidad, la ley debe ser clara y específica, evitando interpretaciones arbitrarias que puedan vulnerar los derechos de

los ciudadanos. La discusión se centra en si el valor del bien debe ser un elemento obligatorio para configurar el delito o si las agravantes deben prevalecer independientemente de su valor (Peña, 2011).

Sobre lo señalado, es preciso indicar que el principio de legalidad es esencial para asegurar que el hurto agravado esté debidamente tipificado y las penas sean impuestas con claridad, evitando interpretaciones arbitrarias, asimismo, es fundamental que la ley sea precisa en cuanto a los elementos del delito, como la cuantía del bien, para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar inseguridad jurídica, donde este principio refuerza la certeza y la previsibilidad en la aplicación del derecho penal.

2.3.2. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL EN EL HURTO AGRAVADO

a. Interpretación de la ley penal

a.1. Problemáticas de la interpretación de la ley penal

La interpretación de la ley penal es fundamental para su correcta aplicación, pero presenta diversas problemáticas debido a la ambigüedad y complejidad de los textos legales, estas dificultades surgen cuando las normas no son claras o generan múltiples interpretaciones, lo que puede afectar la justicia y la coherencia en la aplicación de las sanciones.

A continuación, Bramont (2022) explorara las principales problemáticas que surgen en este proceso interpretativo, por un lado, la necesidad de la interpretación, señalando que la interpretación de la ley penal es esencial para su aplicación, ya que incluso las leyes claras pueden generar ambigüedades o

múltiples interpretaciones. Aunque figuras como Beccaria se oponían a la interpretación judicial por temor a la arbitrariedad, hoy se reconoce que los jueces deben interpretar las leyes para garantizar su correcta aplicación sin crear nuevos delitos, ajustándose al principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

Por otro lado, la naturaleza del acto interpretativo, donde la interpretación de la ley penal es un proceso tanto cognoscitivo como creador. Los jueces, al interpretar leyes ambiguas o incompletas, como en casos de riña o malos tratos, no solo descubren el sentido de la ley, sino que la adaptan al caso concreto, lo que permite la creación de normas más precisas y garantiza la justicia en cada situación (Bramont, 2022).

El mismo autor Bramont (2022) sostiene que el derecho penal debe contener las normas sobre interpretación, donde existe debate sobre si las normas de interpretación deben ser parte del Derecho penal o del Derecho procesal penal. Estas normas, que abordan la ley en abstracto, deben formar parte del Código Penal, ya que son fundamentales para comprender el propósito general de las leyes penales, no solo su aplicación práctica en un juicio.

a.2. La perspectiva de la interpretación de la ley penal

La interpretación de la ley penal es fundamental para su correcta aplicación y asegura que se ajuste a los principios del derecho, la perspectiva de esta interpretación explora los enfoques y métodos que los jueces deben utilizar para entender y aplicar las normas penales, en atención a ello Misari (2017) señala las siguientes:

La perspectiva fáctica sostiene que el derecho penal debe tener sus propios conceptos, evitando depender de otras ramas del derecho para

evitar analogías prohibidas. Esta visión se aplica en situaciones donde el derecho penal debe proteger conductas específicas y no puede recurrir a definiciones extrapenales, aunque en casos como el fraude a la ley penal, se recurre a esta interpretación para sancionar conductas que abusen de los marcos legales disponibles. Sin embargo, la interpretación penal no debe ignorar las concepciones jurídicas fundamentales relacionadas con las instituciones sociales reguladas extrapenalmente.

Por otro lado, la accesoriedad del derecho penal implica que este debe estar vinculado a regulaciones extrapenales, reforzando la protección de determinadas instituciones sociales, como en los delitos contra los recursos naturales, donde el derecho penal se basa en normas administrativas. En los casos de leyes penales en blanco, la norma penal es generalmente vaga, requiriendo el reenvío a regulaciones extrapenales para ser comprendida correctamente. Esto puede generar dilemas sobre cómo interpretar la norma, pero se busca un acercamiento integral entre el derecho penal y las regulaciones extrapenales. La accesoriedad administrativa del acto también plantea desafíos en cuanto a si el juez debe interpretar el acto administrativo dentro del contexto del tipo penal (pp. 36-37).

a.3. Los límites a la interpretación de la ley penal

La interpretación de las normativas penales no se puede de dar de manera tan deliberada, deben contener ciertas restricciones que se proceden a analizar:

La conformidad con la Constitución: Al momento de interpretar una normativa penal, esta debe estar plenamente vinculada con nuestra

Constitución, pues así se brinda una seguridad jurídica frente a las leyes penales, porque si no se daría este parámetro, se proporcionaría una facultad interpretativa demasiado amplia al juez, reprimiendo una interpretación excesiva a lo establecido por la misma (García, 2012, p. 302).

El tenor literal de la ley penal: Esta forma de interpretar tiene una relación con el principio de legalidad, que si queremos desentrañar el contenido de la ley penal debe hacerse literalmente, porque si no caeríamos en la analogía, que en el derecho penal está prohibida; pues la analogía no está permitida cuando restringe derechos. Queda claro que la interpretación tiene que estar dotada de sentido y ofrecer la seguridad jurídica al momento de desentrañar el contenido (García, 2012, p. 303).

La interpretación restrictiva: La interpretación se debe hacer en estricto ámbito punible, entendiéndose desde su núcleo. Tiene que basarse en los tipos penales que surgieron por las necesidades de imputación en ámbitos complejos, asegurando los principios y derechos, que garantizan un mejor proceso y convirtiéndose en un instrumento de lucha contra la criminalidad, de acuerdo con los objetivos político-criminales que se dan en un estado constitucional de derecho, dejándose atrás las arbitrariedades y siguiendo el debido proceso (Misari, 2012).

a.4. Tipos de interpretación de la ley penal

Los tipos de interpretación de la ley penal se refieren a los diversos métodos utilizados para comprender y aplicar las normas penales en situaciones

específica, sobre ello, se procede a definir los principales tipos de interpretación empleados en el derecho penal:

Según el intérprete

Interpretación auténtica: Villa (2014) refiere que es la interpretación realizada por quien creó la norma, por lo que, le corresponde al poder legislativo, y la podemos encontrar en los preámbulos y las exposiciones de motivos de la ley, su análisis permite determinar el sentido y el alcance de la ley penal.

De este mismo modo, Igartua (2022), refiere que este tipo de interpretación, la ejecuta el mismo autor del objeto el cual se va a interpretar, en este sentido, uno de los productos del uso de esta interpretación, nace la “definición legislativa”, en el cual, el propio intérprete de la norma, emite un significado de los términos que contiene la norma que emite

Y, también existe la “ley interpretativa”, en el cual, emite una norma en el cual marca el camino de interpretación que tiene la ley controvertida.

Interpretación judicial: De este método de interpretación, Villa (2014) indica que consiste en la actividad interpretativa desarrollada por los órganos jurisdiccionales al momento de resolver casos concretos. Es práctica habitual, y en muchos casos necesaria, que los jueces y tribunales recurran a la doctrina para aclarar aspectos dudosos de una ley.

Y, reforzando esta idea, Igartua (2022), señala que esta interpretación la realizan los jueces o tribunales, y del cual, el resultado de esta, se evidencia con las sentencias o decisiones similares, en base a un caso concreto.

Interpretación doctrinal: Respecto a este método interpretativo, Villa (2014) refiere a la interpretación realizada por juristas y académicos del

derecho, quienes, motivados únicamente por el afán de conocimiento, se dedican a analizar y explicar el significado de las leyes. Si bien esta interpretación es valiosa por su profundidad, carece de fuerza vinculante. Según Igartua (2022), indica que es típico de la dogmática jurídica, la sistematización de la interpretación entre las normas jurídicas con la creación de conceptos jurídicos, de manera que, pueda proponer su propia interpretación respecto del análisis de las mismas.

Según los medios

Interpretación lingüística: Respecto a esta interpretación, Villa (2014), nos indica que el primer contacto del intérprete con el derecho penal es a través de su redacción literal. Esto significa que las palabras elegidas por el legislador constituyen el punto de partida de su análisis y llevan a creer que el significado directo y literal de estos términos refleja el significado natural y obvio de la norma.

Por ello, con fuerte tenor, este autor, considera que se debe adherir criterios de seguridad jurídica, los cuales están estrechamente relacionados con la claridad de la redacción de las normas. Es importante recordar que, como subraya el profesor Jesús Prieto de Pedro, la claridad, la precisión y la corrección lingüística son las tres virtudes fundamentales que deben guiar un lenguaje jurídico de calidad.

De este modo, Igartua (2022), refiere a su modo que, este tipo de interpretación se llama “declarativa”, pero en cuanto al concepto que desarrolla, advierte que esta se basa únicamente en reconocer propiamente el significado y sentido de las normas jurídicas.

Y, por último, García (2019), en el mismo refiere que se debe recurrir al significado literal del texto legal para establecer el alcance de la regulación que se está interpretando.

Interpretación teleológica: Conforme nos indica Villa (2014), se realiza una interpretación teleológica cuando se busca comprender el propósito de una norma por la cual fue creada, y así, poder llegar a conocer su razón de existencia y su ámbito de protección.

Asimismo, el autor quiere decir sobre dicha interpretación, que se centra en la intención de que una ley se ajuste a lo que dice nuestra Constitución. Además, al buscar el sentido profundo de una ley, podemos hacerlo de dos maneras: centrándonos en lo que el legislador quiso decir al crearla o buscando el significado más lógico y justo que tiene esa ley en sí misma.

Por ello, García (2019), comenta que este tipo de interpretación tiene como objetivo, el poder obtener el fin interpretativo de la norma penal, con la base de mantener un orden de las normas.

Interpretación histórica: Para Villa (2014), este método de interpretación se basa en los antecedentes legislativos que tuvo la norma vigente, para que el intérprete entienda su génesis y evolución. Y, en el mismo sentido, García (2019), dice que este método de interpretación, tiene como fin, tratar de determinar la voluntad que tuvo el legislador para promulgar la norma.

Por último, para Igartua (2022), la interpretación histórica es aquella que vincula a un dispositivo previo de la norma jurídica vigente, un significado que sirvió para llegar hasta el de su última emanación.

Interpretación sistemática: Para esto, Villa (2014), este método de interpretación ocurre cuando se examina la norma penal en sentido general,

con todas las normas extrapenales, sin perder de vista la perspectiva del Derecho Penal, y así, se le pueda considerar coherente y compatible con el orden jurídico en su totalidad.

Y, de este modo, García (2019) dice que este método busca otorgar significado a la ley interpretada, considerando un contexto normativo general que facilite la organización de los conceptos empleados en dicha ley

Según los resultados

Interpretación extensiva: Para Igartua (2022), refiere que este tipo de interpretación va más allá del significado y sentido *prima facie* de la norma jurídica, por lo que, cubre aspectos a los cuales, la interpretación literal no llega a interpretar. En este sentido, para Villa (2014), esta interpretación es aquella que tiene una variedad de hipótesis significativas omnicomprensivas, de las cuales, solo pueden ser usadas análogamente cuando sea únicamente en favor del procesado.

Interpretación restrictiva: Respecto a este tipo de interpretación, Igartua (2022) advierte que, se le prohíbe la libertad de libre interpretación a la norma jurídica según el uso común del lenguaje, por lo que, en algunos casos, se puede llegar a prescindir de algún significado amplio que contengan uno de sus elementos constitutivos.

Por ello, para Villa (2014), advierte que, se puede dar esta interpretación cuando, en relación con otra interpretación posible, resulta un ámbito de aplicación más reducido y más restringido el ámbito de punibilidad, de modo que, en territorio nacional, es una garantía constitucional contenida en el numeral 9 del artículo 139 de la Constitución Política.

Interpretación progresiva: Para Villa (2014), este tipo de interpretación se conceptualiza como, la adecuación de la norma conforme al avance de la sociedad, las ciencias y la economía, pero siempre manteniendo como base, el respeto al principio de legalidad.

Del mismo modo Igartua (2022), le llama interpretación evolutiva, en el cual, está enfocado en dar un significado en base al progreso que tiene la sociedad y la cultura, para poder adaptarlo al momento de su emisión.

b. Funciones del tipo penal

Las funciones del tipo penal son fundamentales en la estructura del derecho penal, ya que determinan el alcance y los límites de las conductas que pueden ser sancionadas, estas funciones permiten garantizar la seguridad jurídica, definir qué comportamientos son punibles y ofrecer una base para la interpretación y aplicación de las normas penales, en atención a ello Villavicencio (2006) destaca las siguientes funciones:

Función indiciaria: La tipicidad cumple un rol indiciario porque la mera adecuación de una conducta al tipo penal constituye solo un indicio preliminar de antijuridicidad. Es decir, la realización típica permite presumir la infracción del ordenamiento, pero esta presunción deberá confirmarse posteriormente mediante el análisis de la antijuridicidad.

Función fundamentadora: Asimismo, la tipicidad desempeña una función de fundamento del delito, pues constituye el punto de partida indispensable para determinar la existencia de una infracción penal. Aunque la teoría del delito parte de la acción, sin un tipo legal que la enmarque dicha acción no tendría relevancia penal. Por ello, el examen de cualquier caso comienza verificando

si la conducta encaja en la descripción típica, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica.

Función seleccionadora: Desde una función selectiva, la tipicidad permite al Derecho Penal determinar qué comportamientos merecen intervención punitiva. El legislador, a través de los tipos, escoge entre múltiples conductas antijurídicas solo aquellas que afectan bienes jurídicos de especial importancia, materializando así el principio de mínima intervención penal.

Función garantizadora: La tipicidad también cumple una función de garantía, derivada directamente del principio de legalidad. El tipo penal delimita con claridad qué conductas son punibles y cuáles no, ofreciendo al ciudadano certeza sobre los límites del poder punitivo. De esta forma, actúa como un freno a la actuación arbitraria del Estado y asegura la protección de la seguridad jurídica.

Función de motivación: En su función motivadora, el tipo penal orienta el comportamiento social, mostrando con claridad qué acciones están prohibidas y deben evitarse. Mediante la amenaza de pena, el legislador busca que los individuos ajusten su conducta a las soluciones consideradas válidas por el ordenamiento jurídico.

Función de instrucción: Finalmente, la tipicidad tiene una función instructiva, ya que permite a los ciudadanos comprender las consecuencias jurídico-penales de sus actos. La norma penal indica qué acciones u omisiones desencadenan la reacción punitiva del Estado, advirtiendo al individuo sobre los comportamientos que no debe realizar (pp. 297-299).

b.1. Vulneración a la función garantizadora de los tipos penales

La función garantizadora de los tipos penales está orientada a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurando que solo se castigue a aquellos que realmente han cometido conductas lesivas. Al utilizar una interpretación extensiva en el delito de hurto agravado, se puede estar vulnerando esta función, ya que amplía los márgenes del delito más allá de lo previsto inicialmente, lo que puede llevar a la criminalización de conductas mínimamente lesivas, afectando el principio de legalidad penal. Este principio busca que solo se castigue aquello que ha sido claramente tipificado en la ley (Arbulú, 2019).

c. Prohibición de la analogía In Malam Partem

La prohibición de la analogía en el derecho penal, según Támara (2020), implica que el juez no puede crear un derecho que perjudique al imputado mediante una interpretación extensiva de la ley. Existen dos tipos de analogía: in bonam partem, que está permitida y se basa en el principio pro libertatis, favoreciendo al reo en situaciones que protejan su dignidad y libertad, e in malam partem, que está prohibida y se refiere a la extensión de los delitos o el agravamiento de penas en perjuicio del acusado, lo cual va en contra de los principios del derecho penal.

2.3.3. EL DELITO DE HURTO AGRAVADO

a. Definición de hurto agravado

El hurto agravado se considera cuando se comete con el uso de violencia, intimidación, o aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad de la víctima. La pena varía dependiendo de la gravedad de la situación y los métodos utilizados para

cometer el delito, como el uso de herramientas especializadas o la comisión del hurto durante situaciones de caos o desastre (Peña, 2011).

Autores como García (2025) señala que el hurto agravado es un delito en el que una persona toma bienes ajenos con la intención de obtener un beneficio ilegal, pero se diferencia del hurto simple por la presencia de circunstancias que aumentan su gravedad. Estas circunstancias incluyen el uso de violencia, la destrucción de propiedades, el empleo de herramientas como ganzúas, o el hurto en situaciones de emergencia o calamidad. Además, la sustracción de objetos de gran valor o relevancia pública también constituye una agravante, lo que justifica una pena más severa para el delincuente.

Según Peña (2019) la define como el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble ajeno con el ánimo de lucro, cometido con circunstancias que aumentan la gravedad del delito, como el uso de violencia, el uso de herramientas especializadas, la sustracción en momentos de calamidad pública o aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, entre otras agravantes.

En atención a lo mencionado, señalamos que el hurto agravado debe ser tratado con especial rigurosidad, dado que las circunstancias que lo rodean reflejan una mayor vulneración de los derechos de la víctima y un impacto más grave en la sociedad, las agravantes, como la violencia o el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, deben ser tomadas en cuenta para asegurar una respuesta penal proporcional, que no solo castigue el hecho, sino que también proteja adecuadamente a la sociedad.

b. Alcances doctrinarios

En la doctrina, se identifican tres factores principales que motivan la tipificación del hurto agravado. Primero, las dificultades de custodia de los bienes por parte de quien

los posee. Segundo, la función del bien y su relevancia, y tercero, la naturaleza del obstáculo que debe superar el autor para llevar a cabo el apoderamiento. A estos se agregan dos factores adicionales: el peligro potencial que representa el delito para otros bienes jurídicos, como la vida o la integridad de las personas, y la existencia de una estructura organizativa, como en el caso de una organización criminal, cuando el hurto es cometido por un grupo de personas (Arbulú, 2019)

c. La configuración del hurto agravado en el derecho penal peruano

El hurto agravado en el derecho penal peruano es una modalidad del delito de hurto que involucra circunstancias que aumentan su gravedad, de acuerdo con el Código Penal peruano, el hurto simple se configura cuando una persona se apodera de un bien mueble ajeno sin consentimiento del propietario. Sin embargo, cuando el hurto se comete bajo determinadas circunstancias, como el uso de violencia, intimidación o la sustracción de bienes de gran valor, el delito se clasifica como agravado (Esquivel, 2011).

En el artículo 186 del Código Penal (1991), se mencionan varias circunstancias que convierten el hurto en agravado, como el abuso de confianza, la participación de más de una persona en el acto, o la sustracción de bienes de gran valor. Estas agravantes buscan proteger no solo el patrimonio de las personas, sino también la seguridad y la paz social, penalizando de manera más severa aquellas conductas que impliquen un mayor perjuicio para la víctima.

Resulta importante para el desarrollo de la investigación dejar en claro cómo los artículos 185, 186 y 444 del Código Penal peruano se vinculan en la tipificación del hurto y su agravación

Por un lado, el artículo 185 define el hurto simple como la sustracción ilícita de bienes ajenos sin circunstancias agravantes, sobre ello el artículo señala:

Artículo 185.- Hurto simple

“El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparán a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación” (Código penal, 1991).

Mientras que el artículo 186 amplía esta definición al incorporar circunstancias que agravan la conducta, como el uso de violencia o la vulnerabilidad de la víctima, sobre ello el código Penal (1991) indica:

Artículo 186.- Hurto agravado

“El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido:

1. Durante la noche. 2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. 3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado. 4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. 5. Mediante el concurso de dos o más personas.

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:

1. En inmueble habitado. 2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos. 3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación. 5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos. 7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales. 8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima. 9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones. 11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 12. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, conforme a la legislación de la materia. 13. Sobre bienes que integren o formen parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas de centros educativos o de salud independientemente de su categoría o nivel, así como del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a perpetrar estos delitos” (Código penal, 1991).

Por último, el artículo 444 establece los requisitos cuantitativos necesarios para distinguir entre hurto simple y agravado, específicamente en relación con el valor del bien sustraído, sobre ello el artículo señala:

Artículo 444.- Hurto simple y daño

“El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase el diez por ciento de una unidad impositiva tributaria (UIT), será reprimido con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado.

La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 189-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no sobrepasa el diez por ciento de una unidad impositiva tributaria (UIT)” (Código penal, 1991).

Sobre los artículos señalados, el análisis de los artículos 185, 186 y 444 del Código Penal peruano revela una clara distinción entre el hurto simple y el agravado, con agravantes que incluyen tanto circunstancias personales del infractor como situaciones excepcionales que aumentan el daño, sin embargo, la falta de un parámetro cuantitativo claro en el hurto agravado genera incertidumbre y podría conducir a sanciones desproporcionadas, vulnerando la coherencia normativa.

d. El hurto y sus modalidades agravadas

Peña (2019) diferencia entre el hurto simple y el hurto agravado, señalando que mientras que el hurto simple se refiere a la sustracción de bienes sin la presencia de circunstancias especiales, el hurto agravado involucra factores que aumentan la gravedad del delito. Las circunstancias agravantes incluyen el uso de violencia, la

sustracción de bienes durante situaciones de calamidad pública, o la comisión del delito con herramientas especializadas como ganzúas o llaves falsas.

Sobre lo señalado, indicamos que el hurto agravado se distingue del simple no solo por el hecho de la sustracción, sino por las circunstancias que lo rodean, como la violencia o el uso de herramientas especializadas, donde estas agravantes aumentan la gravedad del delito, reflejando la intención del autor de causar un mayor daño o aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad.

e. El valor del bien mueble en la tipificación del hurto

Esquivel (2011) señala que una de las discusiones más importantes en torno al delito de hurto agravado es la relación entre el valor del bien sustraído y la calificación del delito. En el derecho penal peruano, el Código Penal no hace una distinción expresa sobre el valor mínimo del bien para que el hurto sea considerado agravado. Sin embargo, en la doctrina y en la jurisprudencia, algunos sostienen que la cuantía del bien sustraído debe ser un criterio determinante para diferenciar entre el hurto simple y el agravado. Los detractores de esta idea argumentan que la gravedad del hurto agravado debe centrarse en las circunstancias del hecho (violencia, intimidación, etc.), más que en el valor económico del bien.

De acuerdo con el Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116 (2011), la autonomía operativa del hurto agravado implica que, independientemente del valor del bien, el delito es considerado más grave por las circunstancias que lo acompañan. Esto representa una crítica a la concepción tradicional que vinculaba la gravedad del hurto exclusivamente al valor del bien sustraído.

f. Jurisprudencia del hurto agravado

La jurisprudencia del hurto agravado establece precedentes judiciales que interpretan y aplican las normas relacionadas con este delito, definiendo criterios sobre las agravantes y su impacto en la pena, sobre ello, Arbulú (2019), recopila los siguientes:

R. N. N° 999-2018 Lima Este: Determinación de la pena en el hurto agravado:

En este caso, se determinó que los acusados por hurto agravado y tenencia ilegal de armas serían condenados a ocho años de prisión. La Corte Suprema consideró las circunstancias del delito, como el uso de violencia e intimidación, que justifican una pena más severa. Además, se dictó una reparación civil en favor de las víctimas. El fallo destaca la importancia de la gravedad del delito para la imposición de la pena. El enfoque fue en la aplicación estricta del Código Penal para delitos graves (Corte Suprema de Justicia de la República, 2018).

R. N. N° 2114-2014 Huancavelica: Reducción de la pena por estado de ebriedad relativa: Este fallo abordó la reducción de la pena en un caso de hurto agravado, debido a que el acusado se encontraba en un estado de ebriedad relativa. La Corte consideró que este factor atenuante justificaba una pena menor, tomando en cuenta el grado de culpabilidad del acusado. Se evaluó que la intoxicación parcial afectaba su capacidad de discernir correctamente en el momento de cometer el delito. La decisión refleja cómo el sistema penal peruano considera factores atenuantes en la aplicación de la pena. Esta jurisprudencia subraya el principio de individualización de la pena (Corte Suprema de Justicia de la República, 2014).

Cas. N° 234-2017 La Libertad: Uso del “espectro electromagnético” en el hurto agravado: Este caso trató el hurto agravado mediante el uso de tecnologías como el "espectro electromagnético", un método avanzado para

cometer el delito. La Corte discute cómo las nuevas tecnologías deben ser consideradas al aplicar el Código Penal. La jurisprudencia resalta la importancia de actualizar las normativas penales para abordar los nuevos métodos delictivos. La decisión también subraya el impacto que estos avances tienen sobre la seguridad pública. El fallo refleja una postura moderna en la interpretación de delitos tecnológicos (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011)

Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116: Valor del bien mueble en el hurto agravado: El acuerdo plenario N° 4-2011/CJ-116 establece que el valor del bien sustraído no es necesario para que se configure el hurto agravado. La Corte puntualizó que lo determinante son las circunstancias del hecho, como el uso de violencia o el abuso de confianza. Este acuerdo responde a la necesidad de aplicar el tipo penal de manera flexible y adecuada, sin depender exclusivamente del valor económico de los bienes hurtados. También se reafirmó que el hurto agravado se tipifica por su naturaleza y no por el valor del objeto. Este principio asegura una mayor claridad en la aplicación del Código Penal (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011).

Cas. N° 286-2017 Cajamarca: Hurto agravado y el Banco de la Nación como actor civil: En este fallo, el Banco de la Nación fue reconocido como actor civil en un caso de hurto agravado, debido a que el robo afectó directamente sus activos. La Corte determinó que las entidades financieras tienen derecho a reclamar reparación por los daños sufridos. Se reafirmó que las víctimas corporativas también pueden acceder a los beneficios del proceso penal, lo cual es clave para la protección de los intereses patrimoniales. Este fallo subraya la importancia de reconocer a las empresas como víctimas en delitos

patrimoniales. Además, resalta cómo el derecho penal también protege los bienes de las instituciones (Corte Suprema de Justicia de la República, 2017).

R. N. N° 1202-2016 Lima: Confesión sincera y reincidencia en el hurto agravado: Este caso evaluó la aplicación de la pena en un hurto agravado, considerando tanto la reincidencia del acusado como su confesión sincera. La Corte aplicó una reducción de la pena debido a la colaboración del acusado, pero mantuvo una pena más alta por la reincidencia en delitos similares. La jurisprudencia refuerza la importancia de la reincidencia como un factor que agrava el delito, mientras que la colaboración en el esclarecimiento de los hechos puede atenuar la pena. La Corte también destacó la necesidad de garantizar que la pena sea proporcional al delito y la persona. Este fallo subraya el principio de rehabilitación y reintegración en la justicia penal (Corte Suprema de Justicia de la República, 2016).

Estas sentencias reflejan cómo la jurisprudencia en el contexto del hurto agravado toma en cuenta factores como la violencia, el uso de tecnologías y la reincidencia para determinar la pena, mientras que también reconoce atenuantes como el estado de ebriedad o la colaboración del imputado

g. Derecho comparado del hurto agravado

El derecho comparado del hurto agravado permite analizar cómo diferentes países abordan este delito y sus agravantes, según el autor Arbulú (2019), las variaciones en la tipificación y las penas reflejan contextos legales y sociales específicos, destacando:

Argentina: En Argentina, el artículo 163 del Código Penal establece penas de prisión de uno a seis años en casos de hurto agravado, incluyendo

circunstancias como el uso de ganzúa, robo durante un desastre o conmoción pública, o el hurto de mercancías en tránsito. Además, el artículo 163 bis aumenta la pena cuando el autor del delito es un miembro de las fuerzas de seguridad. Este enfoque resalta la flexibilidad del sistema argentino en cuanto a la aplicación de penas dependiendo de las circunstancias específicas del delito, como el uso de instrumentos de robo o la vulnerabilidad de la víctima.

Alemania: El Código Penal alemán, en su §243, establece que el hurto agravado se castiga con penas de prisión de tres meses a diez años, dependiendo de las circunstancias. Estas incluyen el uso de técnicas como el robo con fractura o la irrupción con llaves falsas, el hurto de objetos especialmente protegidos o de valor cultural, y el hurto aprovechando la indefensión de la víctima. Alemania tiene un enfoque riguroso, aumentando las penas si el hurto involucra elementos de valor cultural, artístico o histórico, lo que refleja una alta consideración por la preservación del patrimonio.

Bolivia: En Bolivia, el artículo 326 del Código Penal establece penas de reclusión de entre un mes y tres años para el hurto simple, y de tres a cinco años para casos especialmente graves. Estos casos se agravan cuando el delito se comete con escalamiento, el uso de ganzúa, o en situaciones de calamidad pública. Además, el hurto de objetos de valor artístico, científico o cultural también es considerado una agravante.

Brasil: Brasil tipifica el hurto agravado bajo el art 4 y 5 del Código Penal, con penas de reclusión de dos a ocho años en casos donde el delito involucra el uso de fuerza o fraude, la participación de varias personas, o el robo de vehículos automotores destinados a ser transportados a otro estado o al

extranjero. La legislación brasileña también castiga el hurto cometido con la destrucción de obstáculos o el abuso de confianza, reflejando un enfoque orientado a proteger la propiedad pública y privada.

Chile: En Chile, el artículo 447 establece que el hurto agravado se castiga con penas más severas cuando es cometido por dependientes, sirvientes o personas que tienen acceso a las propiedades debido a su trabajo. La ley chilena también establece que el hurto cometido por personas en el entorno laboral, como trabajadores o maestros, agrava las penas, mostrando un enfoque hacia la confianza y la responsabilidad dentro de las relaciones laborales y comerciales.

Costa Rica: El Código Penal de Costa Rica, en el artículo 209, aplica penas de prisión que varían entre tres meses y diez años según el valor del bien sustraído. Las penas aumentan si el hurto se comete durante un desastre o conmoción pública, con el uso de ganzúas, o en vehículos de transporte. El hurto de bienes destinados a la utilidad pública, como los vehículos o materiales utilizados para servicios públicos, también agrava la pena, destacando la protección de bienes de interés colectivo.

España: En España, el artículo 235 del Código Penal establece que el hurto se castiga con prisión de uno a tres años, y las penas se agravan cuando se sustraen bienes de valor artístico, histórico, o cultural, o cuando el delito causa un grave perjuicio económico. La ley también considera agravantes cuando se cometen en circunstancias personales de la víctima, como abuso de vulnerabilidad, y cuando el daño afecta a la economía familiar o se abusa de la confianza de los involucrados. España tiene un enfoque muy detallado que busca proteger bienes de gran valor simbólico y económico.

Italia: En Italia, el artículo 625 del Código Penal establece que el hurto agravado se castiga con penas de prisión de uno a seis años si se comete en un edificio o lugar destinado a la vivienda, con el uso de violencia o fraude, o si se involucran armas o narcóticos. También se considera agravante si el hurto es cometido por tres o más personas o si se da en situaciones de vulnerabilidad, como durante el transporte de bienes o en situaciones de calamidad. Italia, al igual que otros países, enfoca las penas severas hacia el hurto que afecta la propiedad colectiva, la cultura, y el patrimonio (pp. 38-42).

Se aprecia, que del análisis comparativo se resalta cómo distintos países abordan el hurto agravado, tomando en cuenta factores específicos de cada contexto, como el tipo de bienes sustraídos, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y el uso de herramientas especializadas, además, se subraya las diferencias en la aplicación de penas y agravantes que varían según la legislación y los valores sociales de cada país.

2.3.4. ANÁLISIS DEL ACUERDO PLENARIO N° 004-2011-CJ-116 EN EL MARCO DEL DERECHO PENAL PERUANO

a. Contexto del Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116

El Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116 fue emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú con el objetivo de unificar criterios sobre la interpretación y aplicación del delito de hurto agravado. Este acuerdo busca resolver la controversia doctrinal sobre la relevancia del valor del bien sustraído en la tipificación del hurto agravado, ya que en el Código Penal peruano no existe una distinción clara respecto al valor del bien como factor determinante para la agravante. El acuerdo subraya que el hurto agravado se configura por las circunstancias que rodean el hecho delictivo,

como la violencia, intimidación o el abuso de confianza, y no necesariamente por el valor del bien sustraído, esta unificación tiene como fin la aplicación uniforme de la ley y evitar interpretaciones dispersas que generen inseguridad jurídica (Esquivel, 2011).

b. Fundamentos del Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116

Peña (2019) señala que el Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116 discute la configuración del delito de hurto agravado sin la necesidad de un valor mínimo del bien sustraído. Se argumenta que el hurto agravado no depende de la cuantía del objeto, sino que se basa en la pluriofensividad del bien jurídico afectado, es decir, la afectación de varios bienes jurídicos de importancia. Esto se alinea con la idea de que el hurto agravado, por su naturaleza, no requiere superar una remuneración mínima vital para ser considerado delito. Este principio busca evitar que conductas de bajo valor sean tratadas como faltas.

c. La relevancia del valor del bien mueble en el delito de hurto agravado en la jurisprudencia de la Corte Suprema

Los jueces supremos en el Acuerdo Plenario 4-20 II/CJ-116 refieren que en la actualidad coexisten, en la jurisprudencia y en las doctrinas nacionales, posiciones discrepantes en torno a si resulta aplicable el requisito del valor del bien mueble, objeto de hurto (según el art. 444 del CP), para la configuración de las circunstancias agravantes contenidas en el art. 186 del CP, el denominado hurto agravado, por lo que han establecido, por mayoría, reglas vinculantes respecto de este tópico. Aún con ello, se identifican dos posiciones respecto a la temática:

Primera posición: Está a favor de la observancia del valor del bien mueble sustraído para la configuración del tipo penal agravado, sustentando su posición principalmente en los siguientes argumentos:

a) El principio de legalidad —eje esencial del Estado de derecho— y la teoría del tipo penal se mantienen incólumes, especialmente en lo relativo a la función garantizadora del tipo, pues el hurto agravado exige que concurren todos los elementos del hurto simple, incluido el valor del bien sustraído. Por lo tanto, si no se verifica este elemento cuantitativo, la conducta debe ser calificada como falta y no como delito, respetando así los límites establecidos por el sistema penal.

b) Dado que el patrimonio es el bien jurídico central protegido en estos supuestos, se requiere que la afectación posea una entidad relevante. En este sentido, aquellas conductas que no evidencian un nivel significativo de lesión al bien jurídico tutelado deben quedar fuera de la intervención penal, conforme a la orientación político-criminal adoptada por el Código Penal y sustentada en los principios de última ratio y mínima intervención.

Segunda posición: Defiende la autonomía del hurto agravado frente a la exigencia de que el bien mueble objeto del delito alcance una cuantía superior a una remuneración mínima vital. Esta posición plantea los siguientes argumentos:

a) El hurto agravado importa una pluriofensividad de bienes jurídicos.

b) En irrestricto respeto del principio de legalidad —base fundamental del derecho penal—, el art. 444 CP exige taxativamente un monto superior a una remuneración mínima vital tan solo para el supuesto de hecho del art. 185 del CP (hurto simple), mas no del hurto agravado (art. 186 del CP), por lo que debe concluirse en forma lógica y coherente que nuestro sistema punitivo no exige cuantía para la configuración del hurto agravado.

c) Impide se genere impunidad de las conductas ilícitas (Arbulú, 2019, pp. 32-33)

Sobre lo mencionado Peña (2019) manifiesta que el Acuerdo Plenario subraya la autonomía del hurto agravado frente a los requisitos de la cuantía, especificando que no es necesario que el bien sustraído sobrepase un monto de remuneración mínima vital, a diferencia del hurto simple que sí lo exige. Este enfoque considera que el hurto agravado se configura a través de otros elementos, como la utilización de circunstancias agravantes como el hecho de cometer el hurto en una casa habitada o en complicidad con otros individuos, la Corte Suprema, por tanto, resuelve que el hurto agravado no requiere un criterio cuantitativo para su constitución.

En base a lo señalado por los autores, se verifica que la controversia sobre la cuantía del bien sustraído en el hurto agravado refleja una tensión entre la aplicación estricta del principio de legalidad y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades, donde la autonomía del hurto agravado sin exigir cuantía permite una mayor flexibilidad en su tipificación, pero podría generar incoherencias y riesgos de interpretación arbitraria, siendo crucial encontrar un equilibrio que respete el marco legal sin desvirtuar el principio de seguridad jurídica.

d. Implicaciones dogmáticas y política criminal

Desde una perspectiva dogmática, el Acuerdo Plenario aclara que no exigir un valor mínimo para el hurto agravado es coherente con los principios fundamentales del derecho penal, como el principio de legalidad, además, se argumenta que la política criminal no debe sobrecargar el sistema judicial con casos de baja lesividad, lo que se alcanzaría si se excluyera el requisito del valor del bien en el hurto agravado, en cambio, el principio de última ratio, que guía el derecho penal, sugiere que no todas

las conductas de bajo valor deben ser perseguidas penalmente, particularmente cuando se trata de hurtos cometidos con agravantes específicas (Arbulu, 2019)

e. El valor del bien mueble hurtado

García (2025) señala que en el Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116, la Corte Suprema de la República estableció que el valor del bien no es relevante para la configuración del hurto agravado, basándose en consideraciones político-criminales, como la mínima intervención y la última ratio. Sin embargo, García (2025) critica esta decisión, argumentando que la Corte debió haber abordado el problema desde un enfoque dogmático, determinando primero si el valor del bien en el hurto simple era un elemento esencial del tipo penal, y si tal exigencia debía extenderse al hurto agravado.

Si se considera el valor del bien como un elemento constitutivo del tipo básico de hurto, este también debería ser relevante para el tipo agravado, por lo que las agravantes solo podrían aplicarse a los hurtos sobre bienes que superen un valor mínimo. Por otro lado, si se entiende que el valor es una condición objetiva de punibilidad, entonces no formaría parte del tipo agravado, y no sería necesario que el bien hurtado supere el valor mínimo para aplicar las agravantes (García, 2025).

También se destaca que el artículo 185 del Código Penal, que regula el hurto simple, no exige un valor determinado para el bien sustraído. Esto se debe a la existencia de una falta contra el patrimonio que regula los hurtos de bajo valor, excluyendo la necesidad de una pena privativa de libertad. La exigencia de un valor mínimo para la punibilidad en el hurto simple se considera como una condición objetiva de punibilidad, necesaria para que el delito alcance la gravedad suficiente para la imposición de la pena. Además, se menciona que el artículo 444 del Código Penal se

refiere exclusivamente al hurto regulado en el artículo 185, no aplicable a otras regulaciones de hurto.

f. Fundamentos establecidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116

Fundamento 9:

9°. *“Las agravantes del delito de hurto agravado se encuentran descritas en el artículo 186° CP. Ellas requieren la presencia de la totalidad de elementos típicos del hurto básico, a excepción del elemento “valor pecuniario”, pues conservan, en relación al tipo penal básico, un específico margen de autonomía operativa [Cfr. RAMIRO SALINAS SICCHA: Derecho Penal - Parte Especial, 2da Edición, Editorial Grijley, Lima, 2007, p. 867]. El criterio cuantitativo es una exigencia que se encuentra expresa, inequívoca y taxativamente establecida sólo para el hurto simple (artículo 185° CP) y daños (artículo 205° CP), conforme lo estipula el artículo 444° CP; esta exigencia no afecta a los supuestos agravados. Con ello, además, se pone de manifiesto el carácter residual de la falta de hurto. Por tanto, el hurto agravado no requiere del requisito del quantum del valor del bien para su configuración. Así entendida esta infracción penal, respeta el principio de legalidad, previsto en el artículo 2°, inciso 24), literal d), de la Constitución; principio que comprende los requisitos de lex praevia -prohibición de retroactividad de las leyes que agravan la punición o prevean nuevas formas delictuales-, lex scripta -se excluye la costumbre como fuente de delitos y penas, e implica al principio de reserva de ley, que significa que el Congreso es el legitimado para normar las conductas ilícitas con sus respectivas sanciones, por ser el representante de la voluntad popular), y lex stricta -determinación de la ley penal, esto es, el cumplimiento del principio de taxatividad o mandato de*

certeza, que implica que los conceptos que utilice el legislador no pueden ser vagos porque atentaría contra la seguridad jurídica [Cfr. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CANTIZANO: Algunos alcances del principio de legalidad en el ámbito del ordenamiento jurídico peruano. En Revista Institucional N° 7. Aporte al Derecho Penal Peruano desde la perspectiva Constitucional, Lima, 2006. p. 89]”. (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, p. 3)

Según los magistrados, se desprende del Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116, que las agravantes del hurto simple conservan una autonomía operativa en relación al tipo penal básico, toda vez que, el criterio cuantitativo es una exigencia para el hurto simple conforme lo estipula el artículo 444° del Código Penal (1991), “*El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase el diez por ciento de una unidad impositiva tributaria (UIT) (...)*”, refiriendo que dicha exigencia no afecta a las agravantes del hurto, por tanto, no requiere el requisito del quantum del valor del bien.

Es decir, refieren que, como el artículo 444° del Código Penal cita el hurto simple, las agravantes del hurto no deben cumplir dicha exigencia, sin embargo, el análisis de los magistrados se ha centrado solo en ello, sin considerar que el artículo 186° del CP sólo es un catálogo de circunstancias agravantes, el cual no puede operar de manera autónoma pues está subordinado a la existencia del hurto simple, y, en la misma línea de sus argumentos si se sigue el principio de legalidad, se debe aplicar la teoría del delito en el cual se debe exigir la concurrencia de todos los elementos del hurto simple, entre ellos el valor de bien (Código penal, 1991).

Se ha establecido que, para que los bienes muebles tengan relevancia penal, deben poseer un valor patrimonial, es decir, deben tener un valor económico dentro de la interrelación social, tal como refiere Salinas (2019), si el valor del bien involucrado en una conducta tipificada en el artículo 185 del Código Penal no excede una remuneración mínima vital, el hecho será considerado una falta contra el patrimonio y no se calificará como delito de hurto. En resumen, únicamente se configurará el hurto simple cuando el bien mueble tenga un valor superior a una remuneración mínima vital.

Fundamento 10

10°. “Por otro lado, no se puede amparar, en base al principio de favorabilidad del reo, que se genere impunidad. Los inconvenientes prácticos de estimar el criterio cuantificador respecto del objeto material del delito de hurto como parte de las hipótesis del hurto con agravantes son los siguientes: A. Si la sustracción de bienes en casa habitada, queda en grado de tentativa o de frustración, dicho proceder generaría una sanción leve y no equivalente con la voluntad lesiva del agente. B. Una sustracción por banda de un bien mueble de escaso valor, carecería de connotación como delito. C. En el supuesto de que se dejase en indigencia temporal a quien percibe menos de una remuneración mínima vital, dicha conducta no constituiría delito. El Derecho penal sólo protegería a las personas cuya remuneración asciende a dicho monto, quedando por ende desprotegidas las víctimas de ingresos inferiores, con lo se generaría un Derecho penal tutelar del patrimonio de los socialmente mejor ubicados y de desamparo en perjuicio de quienes tienen menores recursos, quienes son mayoría en nuestro país [Cfr. JORGE LUIS SALAS ARENAS y otro: Las calificaciones en el hurto agravado y su relaciones con el hurto simple entre la legalidad, la favorabilidad

y la impunidad (II). En Revista Gaceta de la OCMA. Año V. N° 53-54. Mayo-Junio 2006, pp. 10-11]” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, p. 4)

En atención a lo señalado, se evidencia que el fundamento 10 cuestiona cómo el principio de favorabilidad del reo puede generar impunidad, particularmente en casos donde la sustracción de bienes de bajo valor o en grado de tentativa no refleja adecuadamente la gravedad del delito. Resalta que aplicar un criterio cuantificador como el valor del bien puede desproteger a las víctimas con menores recursos, perpetuando desigualdades sociales. Esta reflexión pone de manifiesto la necesidad de un sistema penal que proteja equitativamente a todas las personas, sin privilegiar a los sectores más acomodados.

Fundamento 11:

11°. “Nuestro legislador, por lo demás, ha estimado tales conductas como agravadas, atendiendo a su mayor lesividad, esto es, a su carácter pluriofensivo de bienes jurídicos. La ley penal asignó tal condición a los hurtos cometidos bajo circunstancias especiales y graves, tales como casa habitada, durante la noche, con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado, mediante el concurso de dos o más personas, etcétera [Cfr. HAMILTON CASTRO TRIGOSO: Las faltas en el ordenamiento penal peruano, Editorial Grijley, Lima, 2008, p. 68], obviando en estos casos criterios de cuantía. Diferente es el criterio político criminal que rige para el delito de hurto simple, que por ser una conducta de mínima lesividad y en observancia a los principios de mínima intervención y última ratio del Derecho penal, demanda que se fije un valor pecuniario mínimo a fin de diferenciarlo de una falta patrimonial. No es éste el caso del hurto con agravantes, dado que existe un

mayor nivel de reproche, caso contrario, se tendría que establecer una cuantía significativa para el delito de robo [Cfr. RAMIRO SALINAS SICCHA: Ibidem, p. 845/” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, p. 4).

El fundamento 11 argumenta que el legislador peruano ha clasificado ciertas conductas de hurto como agravadas debido a su mayor lesividad y el daño pluriofensivo a bienes jurídicos, asignando agravantes como el contexto en que se cometen, a diferencia del hurto simple, que se considera de mínima lesividad y requiere un valor pecuniario mínimo para distinguirlo de una falta, el hurto agravado no se somete a criterios de cuantía, ya que implica un mayor reproche social. Esto refleja un enfoque diferenciado según la gravedad del delito y el contexto en el que ocurre.

Fundamento 12:

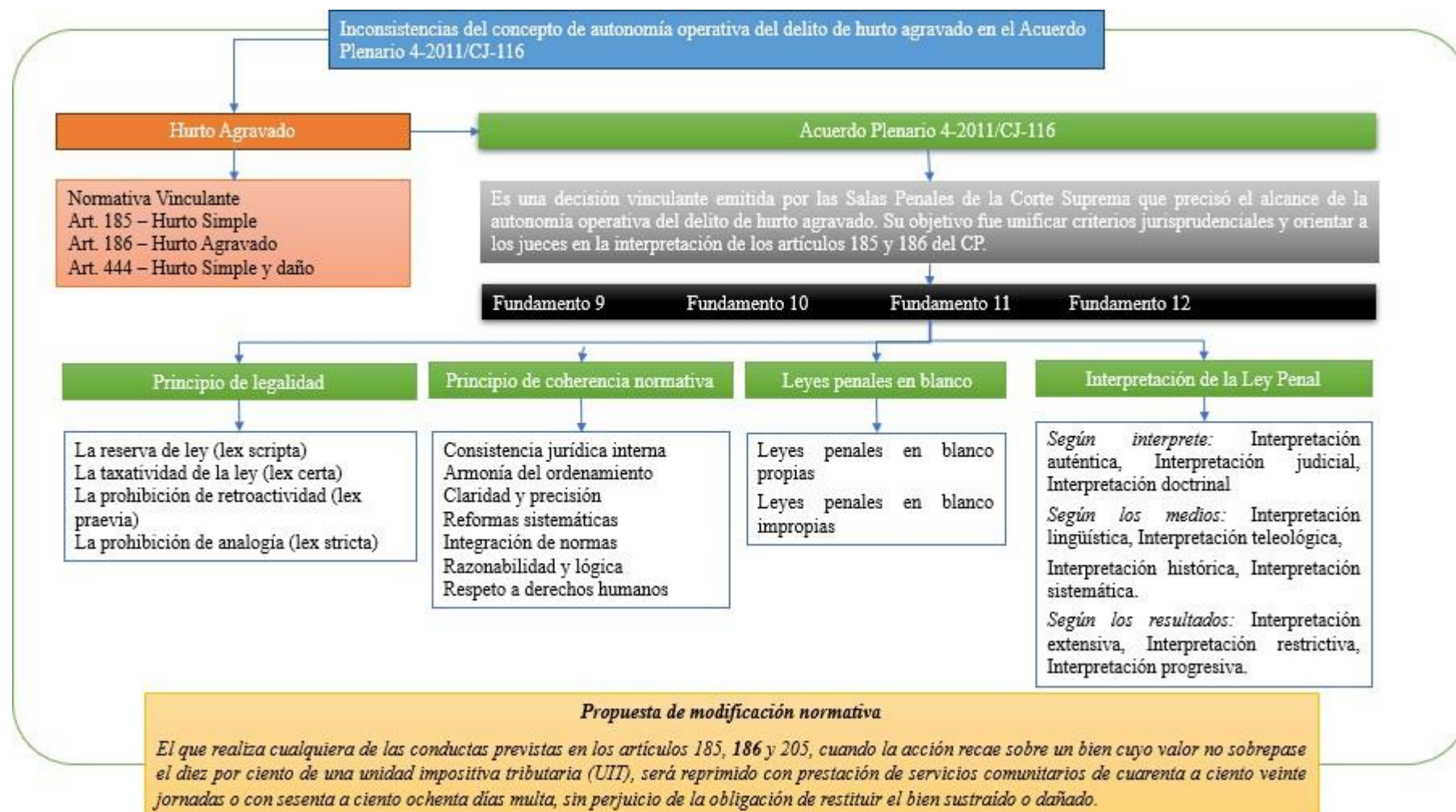
12°. “Con acierto QUINTERO OLIVARES, sostiene que en los hurtos cualificados se ha ido imponiendo el criterio de abandonar la determinación de la pena en éste y otros delitos a través del sistema de saltos de cuantía, y se ha ido abriendo paso la técnica de cualificar el hurto no tanto por el valor económico puro del objeto muchas veces de difícil determinación y de grandes dificultades para ser captado por el dolo, por el más tangible de la naturaleza del objeto de lo sustraído y los efectos cognoscibles de dicha sustracción [Cfr. GONZALO QUINTERO OLIVARES: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 2da Edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 1999. p. 482/ (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011, p. 4)”.

El fundamento 12 destaca la crítica de Quintero Olivares sobre el sistema de determinación de penas en hurtos cualificados. Argumenta que se ha dejado de

lado la cuantificación basada únicamente en el valor económico del objeto sustraído, dada la dificultad de su determinación y de capturar la intención del dolo. En su lugar, se ha comenzado a cualificar el hurto según la naturaleza del objeto robado y los efectos tangibles de la sustracción, lo que permite un enfoque más realista y ajustado a las circunstancias del delito.

Sobre lo señalado en los párrafos anteriores, se puede determinar que el Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116 crea una incoherencia al no exigir el valor del bien para el hurto agravado, lo que podría resultar en sanciones desproporcionadas en casos de bajo impacto económico, aunque se defiende la autonomía del hurto agravado, se pierde claridad y coherencia normativa con el hurto simple, lo que podría perjudicar a las víctimas de delitos de menor cuantía, dado que la falta de un parámetro claro pone en riesgo el principio de legalidad y la justicia en la aplicación del derecho penal.

2.4. MODELO TEÓRICO:



CAPÍTULO III:

METODOLOGÍA

III. METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. SEGÚN APLICABILIDAD O PROPÓSITOS

a. Básica

Witker (2009), señala que la investigación básica, “se enfoca en la creación de teorías y conceptos al identificar leyes o principios generales a través del descubrimiento, tiene como objetivo desarrollar un entendimiento profundo de fenómenos o principios fundamentales, sin necesariamente buscar aplicaciones prácticas inmediatas” (p. 45).

En este sentido, nuestra investigación fue básica, porque determinó las inconsistencias del concepto de autonomía operativa, establecida como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116, con base en la utilización de la interpretación sistemática (extensiva) de los artículos 444°, 185° y 186° del Código penal, como normas penales en blanco.

3.1.2. SEGÚN SU NATURALEZA

a. Cualitativa

Para Palacios et al. (2016) este tipo de investigación es el más adecuado para abordar cualquier asunto jurídico, ya que permite un análisis completo desde todas las perspectivas: legal, social y global. Al alinearse con la teoría tridimensional del Derecho de Miguel Reale, este enfoque es fundamental para impulsar el progreso de nuestro sistema jurídico y garantizar una justicia más equitativa.

Por ello, la presente investigación se caracterizó por ser cualitativa, por cuanto, analizó y contrastó los argumentos utilizados por los jueces supremos en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116 de fecha 06 de diciembre de 2011, en el cual, establecen como doctrina legal la “autonomía operativa” del hurto agravado, sin sustento de la

interpretación extensiva ni sistemática del Código Penal, padeciendo de un sustento dogmático que sustente esta categoría legal indeterminada dentro del derecho penal sustantivo; lo cual, genera una vulneración a la seguridad jurídica de los sujetos pasible de imputación penal dentro del territorio nacional.

3.1.3. SEGÚN SU PROFUNDIDAD

a. Descriptiva

Según Muntané (2010) esta investigación se centra en un examen minucioso de un fenómeno particular, con el objetivo de comprender a profundidad sus características únicas. Los resultados obtenidos de este análisis detallado pueden servir como fundamento para investigaciones posteriores que busquen explorar aspectos más complejos y específicos de la patología en cuestión, tal es así que, el presente trabajo de investigación es descriptivo, por cuanto, se describe y analiza en profundidad el término “autonomía operativa” en el contexto del hurto agravado desarrollado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116 de fecha 06 de diciembre de 2011. Lo cual generará un conocimiento objetivo y sistemático sobre un aspecto poco explorado del derecho penal, lo cual es fundamental para la práctica legal.

b. Propositiva:

Aranzamendi (2013) argumenta que una investigación es propositiva “cuando el investigador al dar cuenta de un vacío o laguna en la normatividad jurídica, podríamos cuestionar normas existentes, determinar límites e insuficiencias, para posteriormente plantear una nueva propuesta teórica o legislativa” (p. 83).

La investigación fue de tipo propositiva porque, además de identificar y analizar las inconsistencias del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, buscó plantear una solución normativa concreta que corrija dichas deficiencias, dicho enfoque permitió

no solo describir el problema, sino también formuló una propuesta de modificación legislativa sustentada en doctrina, jurisprudencia y evidencia empírica.

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

a. Método inductivo

La investigación inductiva comprende en la búsqueda de comportamientos sistemáticos y patrones basados en la observación y la interpretación, por lo que el investigador primero recopila datos relacionados con el tema. (García, 2010).

En atención a lo antes citado, se tiene que, en la presente investigación se usó el método inductivo, toda vez que, se realizó una interpretación profunda del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, de ello, se desprendió los tópicos específicos a tratar, como son la doctrina legal establecida por los Jueces Supremos y de esta manera se determinó cuáles son los argumentos que generan las inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado.

b. Método descriptivo

El método de investigación según Sabino (2020) señala que es un proceso de investigación que aborda en describir características básicas a partir de observaciones, utilizando criterios sistemáticos para determinar la estructura del objeto en estudio y proporcionar información sistemática y comparable con otras fuentes. (p. 166)

De este modo, este método de investigación fue útil y pertinente para el desarrollo de la presente investigación, pues ayudó a describir los argumentos establecidos como doctrina legal, respecto del concepto de autonomía operativa, en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116; a fin de poder contrastarlos con otras fuentes de

información y así, proporcionar datos que puedan corroborar nuestra hipótesis, siguiendo los objetivos establecidos en nuestra investigación.

3.2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

a. Método dogmático

Tantaleán (2015) argumenta que la investigación dogmática jurídica se dedica al estudio sistemático de las normas jurídicas y su ordenamiento. Se caracteriza por su enfoque formalista, centrado en el análisis conceptual y teórico de las fuentes formales del derecho.

Este método se usó en el presente trabajo porque permitió recurrir a fuentes formales del derecho, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional que tuvo como fin evaluar los criterios que emplean los operadores jurídicos e investigadores del derecho, al momento de argumentar el concepto de autonomía operativa establecido como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116.

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1. DISEÑO TEORÍA FUNDAMENTADA

Para Hernández (2014), el diseño “utiliza un enfoque cualitativo sistemático para desarrollar una teoría que explique a nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica, donde estas teorías suelen ser de naturaleza local, donde se vinculan con situaciones y contextos concretos”.

Este diseño permitió construir una interpretación teórica sobre el tema, basada en las percepciones y análisis de los entrevistados, los cuales ayudaron a contextualizar las implicaciones del Acuerdo Plenario N°4-2011/CJ-116 y otros aspectos del marco normativo en el ámbito penal. Además, al aplicar la teoría fundamentada, se favorece

la flexibilidad y adaptación de la investigación a medida que surjan nuevas ideas y conexiones a partir de los datos obtenidos.

3.3.2. ESTUDIO DE CASOS:

Villarreal y Landeta (2010) el estudio de caso “es un diseño de investigación cualitativa que analiza en profundidad un fenómeno dentro de su contexto real. Permite comprender su complejidad a partir de múltiples fuentes de información, integrando perspectivas cualitativas y cuantitativas” (p. 38).

La investigación utilizó el diseño de estudio de casos porque permite analizar las inconsistencias del concepto de “autonomía operativa” del hurto agravado en el Acuerdo Plenario N°4-2011/CJ-116, en base a la interpretación extensiva, y sus así poder advertir las afectaciones al principio de legalidad, coherencia normativa y función garantizadora del tipo penal.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. POBLACIÓN

Conforme las variables de la investigación, tenemos como población a los sujetos pasibles de imputación penal, en base a la legislación nacional.

3.4.2. MUESTRA DE ESTUDIO

a. Muestra de casos

Paccini (2011) sostiene que este tipo de muestra, consiste en un conjunto de documentos o registros utilizados en la investigación para proporcionar evidencia, información o datos relevantes que respalden el análisis o la interpretación de un tema específico.

De este modo, este tipo de muestra se utilizó a fin de poder analizar el contenido del Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116 del 06 de diciembre de 2011, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

b. Muestra de especialistas

La muestra estuvo conformada por 09 especialistas en el área de derecho penal, las mismas que estuvo conformada por 02 jueces, 06 fiscales y un abogado, a fin de recolectar información sustancial que sirvió para la comprobación de la hipótesis planteada.

Para Pacori (2019), la principal ventaja del muestreo no probabilístico radica en su aplicabilidad a diseños de estudio específicos, donde no se busca una representación exacta de la población, sino una selección cuidadosa y controlada de sujetos con características particulares.

3.5. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
V.X.: Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del hurto agravado.	Término no existente en la legislación y doctrina nacional, siendo un término utilizando solo en el Acuerdo Plenario 4/2011-CJ-116, para darle autonomía a los agravantes del hurto simple	Las inconsistencias del concepto de hurto agravado se evaluarán mediante el análisis de casos del Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116 y entrevistas a especialistas (jueces, fiscales y abogados), identificando contradicciones o vacíos en la aplicación de las agravantes del hurto simple, las mismas que serán medidas en función de sus dimensiones	Ley Penal en blanco	Ley en blanco propia Ley en blanco impropia Principio de legalidad Principio de determinación de la ley penal	Nominal	TÉCNICAS: Fichaje Análisis de casos Entrevista INSTRUMENTOS: Guía de fichaje Guía de análisis del caso Guía de entrevistas
			Según la forma de redacción del tipo	Tipo penal básico Tipo penal derivado Tipo penal autónomo		
			Punibilidad	Excusas absolutorias Condición objetiva de punibilidad		
V.Y: Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116	Conforme a la Casación 34-2018 Sala Penal (2019) señalan los magistrados que los acuerdos plenarios establecen criterios interpretativos vinculantes para los jueces, quienes deben aplicarlos en los casos que a norma legal haya sido objeto de interpretación plenaria.	El Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116 será analizado a través de entrevistas a especialistas y un análisis de casos de su contenido, evaluando cómo sus criterios interpretativos afectan la aplicación de las normas del hurto agravado, las mismas que serán medidas en función de sus dimensiones	Según el interprete	Interpretación auténtica Interpretación judicial Interpretación doctrinal		
			Según los medios	Interpretación lingüística Interpretación teleológica Interpretación histórica Interpretación sistemática		
			Según los resultados	Interpretación extensiva Interpretación restrictiva Interpretación progresiva Artículo 444 Autonomía operativa		
			Fundamento 10 y 11	Principio de mínima intervención		

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.6.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

a. Fichaje

Como estrategia formativa, el fichaje es una técnica valiosa que ayuda a los investigadores a desarrollar habilidades de organización, análisis y síntesis de información. Al registrar de forma sistemática los datos obtenidos de diversas fuentes, se construye una base sólida para el desarrollo de investigaciones rigurosas. (Loayza, 2021)

En el presente trabajo se usó la técnica del fichaje para estructurar el contenido y la forma del marco teórico, puesto que nos permitió ahondar con mayor precisión en el análisis de las inconsistencias de la autonomía del hurto agravado en el Acuerdo Plenario N°4-2011/CJ-116, con la recolección de libros y leyes.

b. Análisis de casos

El análisis de caso consiste en la búsqueda, selección y estudio detallado de información relevante, así como en la realización de un examen sistemático de uno o varios casos específicos, con el fin de comprender sus elementos, antecedentes y fundamentos normativos (Hernández et al., 2014, p. 398).

El análisis de casos permitió examinar de manera sistemática los fundamentos y efectos jurídicos del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, evaluando su coherencia interna y sus implicancias normativas.

c. Entrevista

Al respecto “La entrevista es una técnica diseñada para recopilar datos, conocido por su flexibilidad que permite obtener información profunda y detallada, incluso sobre aspectos que ni el entrevistado ni el entrevistador habían identificado previamente” (Hernández, 2014, p. 152).

Para la presente investigación se usó la técnica antes descrita, la cual nos permitió entrevistar a fiscales, jueces y abogados acerca del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, a fin de cotejar si ellos van en la misma línea de los fundamentos establecidos como doctrina legal o si no comparten lo que han argumentado los Jueces Supremos para explicar las agravantes del hurto.

3.6.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

a. Guía de fichaje

Para, Tamayo y Tamayo (2010) es un instrumento indispensable para ordenar y sistematizar la información recopilada durante una investigación. Al registrar de manera concisa los datos relevantes, las ideas principales y las opiniones personales, el investigador construye un archivo personal que facilita la redacción y la consulta posterior. La ficha es, por tanto, una herramienta clave para la gestión eficiente de la información.

La guía de fichaje sirvió en este proyecto, para seleccionar las citas más importantes de expertos en el Derecho Penal, a fin de que, se tenga un conocimiento más amplio sobre ciertos términos o temas esgrimidos en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, así poder comprenderlo de una mejor manera.

c. Guía de análisis de casos

Esta guía, nos ayudó a poder desmembrar los fundamentos establecidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, a fin de poder contrastar y analizar los argumentos respecto de la autonomía operativa del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, y así, poder determinar su inconsistencia en base a la probable falta de sustento del método de interpretación extensiva, vulnerando la forma de redacción como tipo penal derivado del delito de hurto agravado.

d. Guía de Entrevistas

Según Clavijo et al. (2014) es un método de análisis que permite descomponer y categorizar el contenido de los mensajes masivos, con el objetivo de identificar sus elementos constitutivos y comprender su significado

La guía de entrevistas permitió recopilar entrevistas que se realizaron a fiscales, jueces y abogados, sobre el conocimiento que tienen del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, con ello pudimos estudiar sus respuestas, clasificándolas en grupos o categorías para poder cotejar y ver si los entrevistados comparten lo esgrimido por los Jueces Supremos.

3.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.7.1. TÉCNICAS DE CORTE O CLASIFICACIÓN

Según Hernández (2014), esta herramienta permite sistematizar la información obtenida en cada capítulo de la investigación, construyendo ideas conceptuales a partir de la revisión de los textos.

Se utilizó esta técnica para clasificar y organizar la información sobre las posturas que existen en la dogmática penal, sobre las posturas contenidas en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, y así, haber determinado los argumentos que mantienen sistematicidad en el Código Penal.

3.7.2. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Hernández (2014) señala que esta técnica es útil para captar, evaluar, seleccionar y sintetizar los mensajes subyacentes del contenido de los documentos analizados en función de las variables de estudio.

A través de esta técnica, se dio sentido a la información obtenida mediante interpretación, crítica y explicación, en relación a la existencia o no del término compuesto de autonomía operativa, contenido en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116.

3.7.3.COTEJO DE DATOS

Una vez que se logró claridad en los conceptos y la teoría investigada, fue crucial revisar las diferentes fuentes de información disponibles. Luego, se realizó una confrontación de los datos e información recopilada, analizando y comparando cada fuente. Este proceso no solo implicó integrar la información obtenida, sino también evaluar su consistencia, relevancia y fiabilidad, con el fin de establecer conclusiones sólidas y bien fundamentadas.

CAPÍTULO IV:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

Para la determinación de los resultados, se realizó el análisis del caso correspondiente al Acuerdo Plenario N° 004-2011/CJ-116. En este sentido, se procedió de la siguiente manera:

Tabla 2.

Guía de análisis del caso

Datos del caso	Acuerdo Plenario	N°04-2011/CJ-116	
	Fecha	06 de diciembre de 2011	
	Materia/Asunto	Relevancia del valor del bien mueble objeto de hurto para la configuración de las agravantes del artículo 186° del CP.	
Fundamentos establecidos como doctrina legal	Resumen descriptivo del fundamento	Conclusión del fundamento	Observaciones
Fundamento N°09	El artículo 186° del Código Penal establece las agravantes del hurto agravado, las cuales requieren la presencia de todos los elementos del hurto básico, a excepción del valor pecuniario. El fundamento destaca que el criterio cuantitativo solo se aplica al hurto simple y que el hurto agravado conserva un margen de autonomía operativa. Este fundamento sostiene que	El hurto agravado no depende del monto del bien hurtado, sino de circunstancias adicionales que lo hacen más lesivo. La falta de cuantía en el hurto agravado respeta el principio de legalidad, ya que no introduce ambigüedades ni cambios retroactivos en las leyes existentes, y se ajusta	La desvinculación del hurto agravado del valor pecuniario del bien sustraído introduce una ambigüedad en la aplicación del derecho penal, violando el principio de legalidad, que exige claridad y precisión en las leyes. Esto afecta la seguridad jurídica y coherencia normativa, ya que se rompen las bases de unidad del

	<p>el hurto agravado no necesita el requisito del valor del bien para su configuración, ya que la agravante se basa en otras circunstancias como la pluriofensividad del bien jurídico afectado</p>	<p>a las exigencias de <i>lex praevia</i> y <i>lex scripta</i>.</p>	<p>ordenamiento penal. Incluir el artículo 186° del CP, en el artículo 444° restablecería la coherencia y respetaría los principios de legalidad y coherencia normativa. Asimismo, la exclusión de la cuantía como requisito en el hurto agravado puede ser vista como una violación a la función garantizadora y principio de legalidad, ya que introduce un concepto vago que afecta la precisión de la norma penal.</p>
<p>Fundamento N°10</p>	<p>El principio de favorabilidad del reo no debe aplicarse para generar impunidad en los casos de hurto agravado, ya que hay riesgos prácticos que generarían sanciones desproporcionadas en situaciones de escaso valor del bien hurtado. El fundamento describe situaciones donde la</p>	<p>La falta de cuantía en el hurto agravado podría generar impunidad y desprotección de sectores vulnerables, lo que contravendría la justicia material, al crear un derecho penal que favorezca a los más aventajados económicamente y</p>	<p>El no exigir cuantía en el hurto agravado compromete la coherencia normativa y permite interpretaciones arbitrarias, lo que violaría el principio de legalidad al no establecer una cláusula legal indeterminada. Incluir el artículo 186° en el artículo 444° restablecería la</p>

	ausencia de cuantía podría permitir que conductas mínimas no sean consideradas delitos, creando un derecho penal desigual que solo protegería a los sectores sociales con mayores recursos.	desproteja a los más vulnerables.	coherencia normativa en la aplicación de la ley.
Fundamento N°11	El legislador ha considerado que las conductas agravadas de hurto, como aquellas cometidas en circunstancias especiales (casa habitada, durante la noche, con concurso de dos o más personas), tienen una mayor lesividad y, por lo tanto, no requieren el criterio de cuantía del bien hurtado. La ley penal asigna a estas conductas una sanción más grave sin necesidad de valorar el monto del objeto sustraído.	Las circunstancias que agravan el hurto (como la pluriofensividad de bienes jurídicos) justifican que el hurto agravado no dependa del valor pecuniario del bien sustraído, lo que se ajusta a la política criminal que responde a un mayor reproche penal.	Este fundamento subraya la disociación entre el hurto simple y el agravado. Al no requerir cuantía para el hurto agravado, se rompe con el principio de coherencia normativa, creando una cláusula legal indeterminada, y debilitando el principio de legalidad.

Fundamento N°12	El fundamento plantea que en los hurtos cualificados se está abandonando la determinación de la pena por la cuantía del bien, y se está utilizando una técnica de cualificación del hurto no basada en el valor económico, sino en la naturaleza del objeto sustraído y los efectos cognoscibles de la sustracción.	La técnica de cualificación del hurto no debe basarse exclusivamente en el valor económico del objeto, sino también en las circunstancias que rodean el acto, lo que refleja una evolución en el enfoque punitivo del derecho penal.	Este fundamento es impertinente por cuanto, el valor del bien no sirve para poder determinar la aplicación de la pena en un sistema escalonado, en base al monto del bien hurtado.
Análisis según Objetivo General	El Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 introduce el concepto de "autonomía operativa" del hurto agravado, lo que genera inconsistencias normativas y contradicciones con el principio de legalidad y la coherencia normativa. La interpretación literal aplicada vulnera la claridad y precisión en la tipificación del hurto agravado, lo que afecta la seguridad jurídica y crea una cláusula legal indeterminada, además de evidenciar una laguna normativa en el artículo 444°. En este contexto, la modificación de la redacción del artículo 444° en base a una interpretación extensiva, es esencial para restaurar la coherencia normativa y garantizar una interpretación más precisa y justa.		
Análisis según Objetivo Específico 1	Los fundamentos analizados demuestran que la cuantía del bien hurtado no es un elemento necesario para configurar el hurto agravado. Con este razonamiento, se pierde la claridad en la tipificación penal y se genera inseguridad jurídica. La modificación de la redacción del artículo 444° para incluir el artículo 186° restablecería la coherencia normativa, asegurando que la ley sea clara y predecible, y alineando la interpretación con el principio de legalidad.		
Análisis según Objetivo Específico 2	El análisis de los fundamentos revela que el hurto agravado debe depender del hurto simple, ya que las agravantes son una extensión del tipo básico. Desvincular ambos tipos penales rompe la coherencia normativa y crea un vacío que afecta la aplicación de la ley. La falta de dependencia entre los tipos		

	<p>genera incertidumbre en la aplicación del ius puniendi y vulnera el principio de legalidad, por lo que la modificación del artículo 444° es crucial para garantizar una estructura penal lógica y coherente.</p>
<p>Análisis según Objetivo Específico 3</p>	<p>El análisis de los fundamentos del Acuerdo Plenario N° 04-2011/CJ-116 permite advertir que la “autonomía operativa” presenta inconsistencias al aplicarse al hurto agravado, ya que separa artificialmente el tipo básico de sus agravantes, donde los fundamentos examinados omiten el criterio de cuantía del hurto simple y generan una cláusula legal imprecisa que afecta la claridad normativa, además, la interpretación asumida amplía el alcance del artículo 186° más allá de lo previsto expresamente en la ley, ocasionando una ruptura con la sistematicidad del Código Penal y contradicciones respecto al valor del bien hurtado, en consecuencia, los fundamentos analizados evidencian que la autonomía operativa carece de coherencia normativa y resulta incompatible con el principio de legalidad.</p>
<p>Análisis según Objetivo Específico 4</p>	<p>Los fundamentos también destacan la necesidad de modificar la redacción del artículo 444° para incluir el artículo 186° y garantizar la coherencia entre hurto simple y agravado. Esta modificación es necesaria para restaurar la coherencia normativa y evitar interpretaciones contradictorias que generen inseguridad jurídica. Al integrar el artículo 186° en la redacción del 444°, se asegura una aplicación más clara y consistente de la ley, respetando el principio de legalidad y proporcionando certeza a los operadores jurídicos.</p>

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.2.1. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO GENERAL

En relación con el objetivo general: “Analizar las inconsistencias del concepto de la 'autonomía operativa' del delito de Hurto Agravado instituidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 en base al método de interpretación extensiva”, a partir del análisis correspondiente al Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, se obtuvo como resultado que el concepto de “autonomía operativa” introduce inconsistencias normativas y contradicciones con el principio de legalidad y la coherencia normativa, al vulnerar la claridad en el delito del hurto agravado, además de evidenciar una laguna normativa en el artículo 444°.

En relación con los resultados mencionados, se observa que las opiniones individuales de los entrevistados coinciden con las inconsistencias identificadas en el concepto de autonomía operativa, así, Cabrera (2025) señala que ningún tipo agravado puede operar sin la configuración previa del tipo básico, mientras que Valdéz (2025) afirma que la autonomía operativa desarticula la secuencia dogmática necesaria para la subsunción. Gonzales (2025) considera que esta figura carece de sustento dogmático y genera confusión al momento de formular imputaciones, y Sánchez (2025), aunque la respalda, lo hace desde una perspectiva de gravedad social, sosteniendo que el agravado posee características propias. Rodríguez (2025) sostiene que la autonomía operativa distorsiona la lógica de los artículos 185° y 186°, y Gallo (2025) advierte que la interpretación literal del Acuerdo Plenario introduce más dudas que certezas. Trujillo (2025) afirma que la autonomía operativa rompe la estructura lógica del Código Penal, mientras que Díaz (2025) señala que la categoría no tiene sustento dogmático y confunde la estructura del hurto agravado. Finalmente, Chu (2025) advierte que la autonomía operativa genera indefensión al procesado al

permitir sanciones desproporcionales, estas opiniones, confirman las inconsistencias detectadas en el análisis del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116.

Lo manifestado coincide con lo señalado por Simmons (2025) en su investigación quien determinó que la variabilidad en los umbrales de los delitos afecta la percepción de los infractores y de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, resaltando la importancia de establecer umbrales objetivos y bien definidos para garantizar la coherencia normativa y la efectividad del sistema penal, alineándose con la necesidad de una interpretación más precisa en el marco normativo legal. De igual forma con lo señalado por Bayona (2018) quien sostuvo que el Acuerdo Plenario 04-2011 carece de justificación jurídica sólida ante el principio de legalidad, ya que la ausencia de un parámetro claro de cuantía en el hurto agravado crea una interpretación ambigua, donde esta falta de claridad vulnera el principio de taxatividad y afecta la coherencia normativa, lo que coincide con la crítica al Acuerdo Plenario de desordenar el sistema penal.

Respecto a las bases teóricas, los resultados guardan coincidencia con lo señalado por García (2025) quien señala que el principio de legalidad exige que las conductas delictivas sean claramente definidas por la ley, sin espacio para interpretaciones arbitrarias, donde en el caso de la autonomía operativa del hurto agravado, la interpretación extensiva vulnera este principio al no especificar con claridad los elementos necesarios para tipificar el delito. De igual manera guardan coincidencia con lo señalado por Vallejo (2018) donde señala que la falta de coherencia entre los tipos penales de hurto simple y agravado crea confusión, lo que infringe el principio de coherencia normativa, donde las normas deben estar interconectadas y complementarse entre sí para no generar contradicciones dentro del sistema.

Asimismo, se añade que, según lo precisado por el Tribunal Constitucional (2011) en la sentencia del Exp. 01469-2011-PHC/TC, el principio de legalidad prohíbe la creación de “cláusulas legales indeterminadas”, lo que resalta la importancia de definir con claridad los elementos necesarios para configurar un delito, como es el caso del hurto agravado. De igual manera, según el Tribunal Constitucional (2004) en el Pleno Jurisdiccional, Exp.047-2004-AI/TC, el principio de coherencia normativa implica que todas las normas dentro del orden jurídico deben estar en armonía y ser complementarias, garantizando que no haya contradicciones dentro del sistema penal, lo que se ve comprometido por la desvinculación del hurto agravado del tipo simple. Aquí es necesario destacar a autores como Esquivel (2011), quien señala la importancia de distinguir entre el hurto simple y el agravado a través de la gravedad del hecho y no solo por el valor del bien, esto guarda relación con el análisis, donde la autonomía operativa desvincula la gravedad del hurto agravado del valor del bien sustraído, generando confusión y contradicciones con los principios de coherencia normativa.

Desde una perspectiva personal, se considera que el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, al introducir la “autonomía operativa” del hurto agravado, genera una importante distorsión en la coherencia normativa del Código Penal, donde la falta de claridad en los elementos que configuran el hurto agravado, especialmente al desvincularlo del hurto simple y omitir la cuantía del bien hurtado, debilita el principio de legalidad, generando incertidumbre y permitiendo interpretaciones ambiguas, dado que según lo precisado por el Tribunal Constitucional (2011), en la sentencia del Exp. 01469-2011-PHC/TC, el principio de legalidad prohíbe la creación de cláusulas legales indeterminadas, lo que implica que cualquier tipo penal debe estar claramente definido para evitar interpretaciones arbitrarias que afecten los

derechos fundamentales, esta situación afecta la seguridad jurídica tanto para los operadores jurídicos como para los procesados, evidenciando una laguna normativa en el artículo 444° lo que agrava aún más la confusión, determinando la necesidad de restaurar la coherencia normativa, donde según el Tribunal Constitucional (2004), en el Pleno Jurisdiccional, Exp.047-2004-AI/TC, determinó que el principio de coherencia normativa implica la existencia de una relación armónica entre todas las normas del ordenamiento jurídico, lo que subraya la necesidad de que las normas penales estén interconectadas de manera lógica para evitar contradicciones dentro del sistema penal, donde una reforma en la redacción del artículo 444° es urgente, pues garantizaría una aplicación más justa y predecible del derecho penal, respetando principios fundamentales como el principio de legalidad, coherencia normativa y taxatividad.

4.2.2. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N °1

En relación al objetivo específico 1: “Contrastar que el concepto de 'autonomía operativa' del hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 depende de la concurrencia de la cuantía del bien hurtado como elemento normativo del tipo penal, para el delito de hurto agravado.”, a partir del análisis correspondiente al Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, se obtuvo como resultado que la cuantía del bien hurtado es un elemento esencial para configurar el hurto agravado. Sin este parámetro, se pierde la claridad en la tipificación penal y se crea inseguridad jurídica, lo que requiere una modificación en el artículo 444° para restablecer la coherencia normativa y garantizar la aplicación justa de la ley.

En concordancia con los resultados obtenidos en el análisis, las opiniones de los entrevistados refuerzan la conclusión de que la cuantía del bien hurtado constituye

un elemento normativo indispensable para la configuración del hurto agravado, sobre ello Cabrera (2025) sostiene que la cuantía debe ser exigida para fortalecer el principio de legalidad y evitar pronunciamientos desproporcionados; del mismo modo, Valdéz (2025) afirma que la cuantía funciona como estándar objetivo de lesividad sin el cual la calificación carece de sustento lógico, Gonzales (2025) recalca que la dependencia entre hurto simple y agravado obliga a exigir cuantía también en este último, mientras que Rodríguez (2025) advierte que prescindir de dicho parámetro rompe la relación dogmática entre ambos tipos penales. A su vez, Gallo (2025) enfatiza que eliminar la cuantía debilita la lógica del sistema penal, y Trujillo (2025) señala que su ausencia genera sanciones desproporcionadas al no poder diferenciar entre conductas insignificantes y graves, por otro lado Díaz (2025) complementa indicando que la cuantía garantiza la coherencia normativa y evita desajustes en la configuración del delito, y Chu (2025) subraya que es el filtro que delimita lo penalmente relevante, sin el cual se afecta la proporcionalidad de la pena. Estas opiniones, analizadas, coinciden plenamente con los resultados del análisis que advierten la necesidad de mantener la cuantía como elemento objetivo indispensable del hurto agravado.

Los resultados obtenidos guardan coincidencia con investigaciones previas de autores, destacando a Talledo (2022), quien en su investigación sobre la controversia de criterios de la cuantía en el hurto, evidenció que la cuantía es un elemento esencial para la tipificación del hurto agravado, ya que sin ella se genera una ambigüedad en su aplicación, lo que afecta la coherencia normativa, donde este antecedente refuerza la necesidad de modificar el artículo 444° para restablecer un criterio claro en la ley penal. De modo similar Castañeda (2020), en su investigación sobre la cuantía en el hurto agravado, argumenta que las agravantes

deben mencionarse en el artículo 444° para asegurar una interpretación extensiva y coherente con el principio de legalidad, donde la necesidad de la cuantía como un elemento objetivo ayuda a garantizar la aplicación justa del derecho penal y restablece la coherencia normativa entre el hurto simple y el agravado.

Respecto a los referentes teóricos, los resultados coinciden con lo indicado por Navarro (2022) quien señala que el principio de coherencia normativa subraya que las normas deben seguir una secuencia lógica y estar interconectadas, determinando que la falta de la cuantía en el hurto agravado crea contradicciones con el hurto simple, debilitando la estructura interna del Código Penal. Asimismo, guardan similitud con lo manifestado por Caro & Reyna (2023) donde la falta de claridad sobre la cuantía y su implicancia en el hurto agravado vulnera el principio de legalidad, donde el legislador debe especificar con precisión los elementos que constituyen el tipo penal, sin dejar espacio a la interpretación arbitraria, para garantizar la seguridad jurídica. De igual manera con Peña (2019) destaca que el hurto agravado debe ser considerado pluriofensivo debido a las circunstancias que lo acompañan, no solo al valor del bien, sin embargo, al igual que los resultados obtenidos, reconoce que la claridad es esencial para garantizar que el tipo penal sea aplicable de manera coherente y que no se den interpretaciones contradictorias.

En cuanto al objetivo específico 1, se considera que la cuantía del bien hurtado juega un papel esencial en la normativa del hurto agravado, su ausencia en el Acuerdo Plenario crea una cláusula legal indeterminada que debilita la coherencia normativa entre el hurto simple y el agravado, vulnerando el principio de legalidad y afectando la seguridad jurídica, esta falta de claridad genera espacio para interpretaciones arbitrarias, donde para garantizar una aplicación coherente y justa

de la ley penal, es necesario restablecer la cuantía como un elemento normativo dentro del hurto agravado, asegurando que la legislación sea clara, precisa y predecible, respetando los principios fundamentales de coherencia normativa y legalidad.

4.2.3. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N °2

En relación al objetivo específico 2: “Analizar el concepto de 'autonomía operativa' del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, como dependencia de la concurrencia previa del delito de hurto simple”, a partir del análisis correspondiente al Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, se obtuvo como resultado que el hurto agravado debe depender del hurto simple, ya que las agravantes son una extensión del tipo básico, desvincular ambos tipos penales rompe la coherencia normativa y crea un vacío que afecta la aplicación uniforme de la ley, vulnerando el principio de legalidad.

En correspondencia con los resultados del análisis del Objetivo Específico 2, donde se determinó que el hurto agravado debe ser dependiente del hurto simple, las entrevistas realizadas fortalecen esta conclusión al presentar opiniones que se alinean con dicha dependencia, donde se cita a Cabrera (2025) quien afirma que todo tipo agravado requiere necesariamente la configuración previa del tipo básico, criterio que Valdéz (2025) respalda al señalar que la autonomía operativa desarticula la estructura de subsunción propia del delito. Gonzales (2025) indica que no puede imputarse una forma agravada sin haber acreditado primero el hurto simple, mientras que Rodríguez (2025) enfatiza que la desvinculación entre ambos tipos afecta la coherencia normativa y crea términos indeterminados. Gallo (2025) sostiene que el hurto agravado es un tipo derivado cuya existencia depende del

simple, y Trujillo (2025) coincide al señalar que el agravado es un “plus” del tipo básico y no una figura autónoma. También Díaz (2025) afirma que la autonomía operativa rompe la estructura lógica del Código Penal, y Chu (2025) concluye que desligar la agravante del tipo base contradice la teoría del delito y genera escenarios de indefensión. Solo Sánchez (2025) considera que la autonomía es posible, aunque desde una perspectiva minoritaria. Con ello, las opiniones contrastadas refuerzan la conclusión de que el hurto agravado es, dogmáticamente, un tipo penal dependiente del hurto simple.

Estos resultados guardan relación con lo señalado por Rentería y Tello (2016) quienes determinaron que el artículo 444° no especifica si la cuantía debe ser considerada en el hurto agravado, lo que crea una controversia interpretativa, donde la dependencia entre los tipos penales de hurto simple y agravado debe restablecerse para garantizar la coherencia interna del Código Penal. De modo similar Medina (2018) sostiene que la determinación de la cuantía es esencial para aplicar el tipo penal de hurto agravado, ya que su omisión afecta la aplicación coherente de la ley, donde la falta de dependencia entre los tipos crea inseguridad jurídica y vulnera los principios de legalidad y coherencia normativa.

Respecto a las bases teóricas, los resultados guardan coincidencia con lo señalado por Navarro (2022) quien señala que la desvinculación entre los tipos penales de hurto simple y agravado rompe la coherencia interna del Código Penal, donde las normas deben estar alineadas y no generar contradicciones entre ellas, y al no requerir la concurrencia del tipo base, el sistema se vuelve incoherente. Asimismo, coinciden con García (2025) quien señala que el principio de legalidad exige claridad en las conductas tipificadas, y desvincular el hurto agravado del tipo básico

vulnera este principio, creando ambigüedad en la aplicación de la norma. Autores como Peña (2019) plantea que la autonomía operativa en el hurto agravado no debe desvincularse del hurto simple, ya que las circunstancias agravantes son solo un complemento del tipo básico, lo que refuerza la idea de que el hurto agravado no debe considerarse un delito independiente, debiendo mantenerse la relación entre ambos tipos penales para evitar vacíos normativos que puedan generar interpretaciones arbitrarias.

En cuanto al objetivo específico 2, se considera que la dependencia del hurto agravado del hurto simple es un principio fundamental para garantizar la coherencia normativa del Código Penal. Al desvincular ambos tipos penales, se crea un vacío que genera inseguridad jurídica, lo que podría derivar en interpretaciones arbitrarias y en la imposición de sanciones injustas. La desvinculación no solo rompe la secuencia lógica del sistema penal, sino que también vulnera el principio de legalidad al no precisar los elementos que configuran el hurto agravado, siendo crucial restaurar esta dependencia para que las normas estén alineadas, lo que garantizaría una aplicación coherente y justa de la ley, favoreciendo tanto a la justicia penal como a las garantías procesales del imputado. En este contexto, el artículo 186° no contiene un supuesto de hecho que pueda determinar un hecho propio distinto del artículo 185, para que el hurto agravado se catalogue como tipo penal autónomo, lo referido se basa en el concepto de tipo penal derivado y autónomo, lo que refuerza la necesidad de que el hurto agravado dependa del hurto simple para mantener la coherencia normativa.

4.2.3. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N °3

En relación al objetivo específico 3: “Describir las inconsistencias del concepto de ‘autonomía operativa’ del delito de hurto agravado establecida en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, a partir del análisis de la interpretación doctrinal y extensiva”, a partir del análisis correspondiente al Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, se obtuvo como resultado que los fundamentos del acuerdo introducen una separación artificial entre el hurto simple y el hurto agravado, omitiendo la exigencia del valor del bien propio del tipo básico y generando una cláusula legal imprecisa que afecta la claridad normativa, asimismo, se advierte que la Corte Suprema amplía el alcance del artículo 186° más allá de lo previsto expresamente en la ley, lo que produce una ruptura con la sistematicidad del Código Penal y contradicciones en la valoración del bien hurtado, en este sentido, se evidencia que las inconsistencias identificadas son consecuencia directa de una interpretación extensiva no permitida en materia penal, la cual compromete la coherencia normativa y resulta incompatible con el principio de legalidad.

En relación con los resultados del análisis del Objetivo Específico 3, donde se identificaron inconsistencias derivadas de la interpretación literal y extensiva que sustenta el concepto de “autonomía operativa”, las entrevistas permiten contrastar estas conclusiones a partir de las opiniones de los especialistas, tales como, Cabrera (2025) quien afirma que la interpretación literal del Acuerdo Plenario permite separar indebidamente el hurto agravado del tipo básico, lo que genera ambigüedad e inconsistencias interpretativas, Valdéz (2025) coincide al señalar que la desvinculación entre hurto simple y agravado vulnera la lex certa y afecta la coherencia normativa. Gonzales (2025) sostiene que la interpretación utilizada

justifica un vacío legal que compromete la claridad y previsibilidad del tipo penal, mientras que Sánchez (2025) advierte que la autonomía operativa altera la sistematicidad entre los artículos 185° y 186°, al exigir la concurrencia previa del tipo básico, por su parte Rodríguez (2025) critica que la Corte Suprema haya creado una figura sin sustento dogmático, y Gallo (2025) destaca que la interpretación literal introduce problemas conceptuales al romper el orden lógico entre tipo base y agravantes. Trujillo (2025) enfatiza que la creación de la autonomía operativa vulnera el principio de legalidad al permitir que el agravado opere sin la estructura típica del hurto simple, y Díaz (2025) señala que el término ha generado confusión al no existir doctrinalmente un elemento que otorgue independencia al hurto agravado. Finalmente, Chu (2025) afirma que la interpretación literal aplicada en el Acuerdo Plenario genera un vacío normativo que impide imputar correctamente el hurto agravado sin la concurrencia previa del tipo básico. Estas opiniones confirman y refuerzan las inconsistencias identificadas en el análisis respecto al concepto de autonomía operativa.

Los resultados obtenidos guardan coincidencia con investigaciones previas, destacando a Simmons (2025) quien señala que la ausencia de umbrales precisos genera sanciones desproporcionadas y compromete la certeza jurídica, lo que se relaciona directamente con la infracción del principio de legalidad detectada en el presente estudio, al suprimirse la cuantía como elemento objetivo del hurto agravado. Asimismo, los resultados del objetivo coinciden con lo planteado por Talledo (2022), quien advierte que la falta de criterios uniformes en torno a la cuantía afecta el principio de coherencia normativa, situación que se replica en el Acuerdo Plenario al desvincular el hurto agravado del hurto simple, generando contradicciones entre los artículos 185°, 186° y 444° del Código Penal. De igual

forma, Castañeda (2020) sostiene que el artículo 186° no contiene un supuesto de hecho autónomo que permita catalogar al hurto agravado como tipo independiente, afirmación que coincide con el hallazgo de esta tesis de que las agravantes del artículo 186° dependen necesariamente del tipo base y no pueden operar de forma independiente. Finalmente, es preciso señalar que los antecedentes respaldan la existencia de una laguna normativa en el artículo 444°, pues todos coinciden en que la regulación actual carece de claridad para articular adecuadamente la relación entre cuantía, hurto simple y hurto agravado, lo que refuerza las inconsistencias identificadas.

Dichos resultados guardan una clara correspondencia con las bases teóricas revisadas, especialmente en relación con el principio de legalidad y la coherencia normativa, donde Hilgendorf y Brian (2017) sostienen que el principio de legalidad exige que el ciudadano pueda prever las consecuencias de su conducta, evitando cláusulas indeterminadas, lo cual coincide con los hallazgos del estudio, que indican que la “autonomía operativa” genera imprecisión y vulnera la *lex certa* al suprimir la cuantía como elemento objetivo del hurto agravado. Asimismo, Vallejo (2018) afirma que la coherencia normativa requiere armonía entre los dispositivos legales, lo que se contrapone con la interpretación del Acuerdo Plenario que separa artificialmente los artículos 185°, 186° y 444°, confirmando la ruptura sistemática encontrada en los resultados. De igual forma, García (2025) señala que el artículo 186° no contiene un supuesto de hecho autónomo y que, como tipo derivado, depende de todos los elementos del hurto simple, lo que coincide plenamente con el hallazgo de que la autonomía operativa es dogmáticamente inviable. Finalmente, Rodilla (2009) advierte que la interpretación penal no puede crear antinomias dentro del sistema jurídico, lo que se relaciona con los resultados que identifican

una laguna normativa en el artículo 444° y la consecuente distorsión del sistema de tipicidad. En conjunto, el marco teórico confirma las inconsistencias estructurales encontradas en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116.

En consideración a todo lo expuesto, se indica que el concepto de “autonomía operativa” introducido por el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 constituye una construcción jurídica que no solo carece de sustento dogmático sólido, sino que además ha generado una distorsión innecesaria en la aplicación del delito de hurto agravado, donde a partir del análisis, las entrevistas, los antecedentes y el marco teórico, es posible concluir que dicha figura ha producido más incertidumbre que claridad, afectando principios esenciales como legalidad, coherencia normativa y proporcionalidad, donde la lectura del Pleno se aparta de la estructura típica prevista por el legislador, desconoce la dependencia lógica entre los artículos 185° y 186° y exacerba la laguna normativa existente en el artículo 444°. En ese sentido, se considera que el mantenimiento de la autonomía operativa resulta incompatible con un sistema penal garantista y previsible, por lo que su revisión resulta urgente para restituir la armonía del tipo penal y garantizar la aplicación coherente y racional del hurto agravado en el ordenamiento jurídico peruano.

4.2.4. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N °4

En relación al objetivo específico 4: “Proponer la modificación de la redacción normativa del artículo 444° del Código Penal, incluyendo en su redacción, al artículo 186° del mismo código”, a partir del análisis correspondiente al Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, se obtuvo como resultado que es necesaria la modificación del artículo 444° para incluir el artículo 186° y garantizar la coherencia entre el hurto simple y agravado, ya que esta modificación ayudaría a

restaurar la coherencia normativa, evitando interpretaciones contradictorias, al integrar el artículo 186° en el 444°, se lograría una aplicación más clara y consistente de la ley, respetando el principio de legalidad.

En concordancia con los resultados obtenidos en el análisis del Objetivo Específico 4, donde se advirtió la necesidad de modificar el artículo 444° para incorporar expresamente al artículo 186°, las opiniones de los entrevistados fortalecen esta propuesta legislativa. Así, Cabrera (2025) considera necesaria una modificación para clarificar la relación entre hurto simple y agravado, destacando que la coherencia normativa exige un parámetro cuantitativo homogéneo. Valdéz (2025) respalda la reforma al señalar que incluir el artículo 186° garantizaría uniformidad y mayor seguridad jurídica. Gonzales (2025) afirma que la falta de conexión entre ambos artículos genera un vacío interpretativo que debe corregirse mediante una modificación expresa. Rodríguez (2025) sostiene que incorporar el artículo 186° cerraría el vacío normativo que hoy afecta la coherencia del sistema penal, mientras que Gallo (2025) enfatiza que la reforma otorgaría precisión y evitaría interpretaciones expansivas. Trujillo (2025) también respalda la modificación legislativa, al indicar que armonizaría la imputación del delito y reforzaría la seguridad jurídica; del mismo modo, Díaz (2025) considera que la reforma proporcionaría claridad en la calificación de los hechos. Finalmente, Chu (2025) sostiene que la incorporación del artículo 186° al artículo 444° evitaría sentencias dispares y permitiría una aplicación más equitativa de la ley penal. Estas opiniones, abordadas individualmente, coinciden plenamente en la necesidad de la reforma legislativa propuesta, reforzando los resultados del análisis.

Los resultados obtenidos guardan coincidencia con la investigación realizada por Castañeda (2020), quien, en su propuesta de reformulación de los tipos penales de hurto agravado, sugiere que las agravantes del artículo 186° se incluyan en el artículo 444° para restaurar la coherencia normativa y garantizar una aplicación más precisa de la ley, sin que se generen vacíos interpretativos, esto se alinea con la propuesta de modificar la redacción del artículo 444°. De manera similar Simmons (2025) argumenta que es crucial establecer umbrales claros y bien definidos en el sistema penal, donde esta perspectiva apoya la necesidad de una reforma en el artículo 444° para asegurar una aplicación coherente de la ley penal, respetando el principio de legalidad y la coherencia interna del sistema.

Los resultados guardan coincidencia con los referentes teóricos, tal como lo señala Caro y Reyna (2023) quienes determinan que modificar el artículo 444° para incluir el artículo 186° aseguraría la precisión y claridad en la tipificación del hurto agravado, alineando la ley con el principio de legalidad y evitando interpretaciones arbitrarias. Los resultados también guardan coincidencia con García (2025), quien defiende que la coherencia normativa es clave en la legislación penal, especialmente cuando se tratan tipos penales relacionados como el hurto simple y el agravado, donde una modificación garantizaría la coherencia entre ambos tipos, algo que el autor considera esencial para que no se generen contradicciones en la aplicación de la ley. Asimismo, con lo indicado por Rodilla (2009) quien señala que la modificación del artículo 444° para incluir el artículo 186° restauraría la coherencia normativa entre el hurto simple y el agravado, cerrando el vacío interpretativo que genera ambigüedad en la aplicación de la ley.

En cuanto al objetivo específico 3, consideramos que la modificación del artículo 444° para incluir el artículo 186° es esencial para restaurar la coherencia normativa y garantizar una aplicación justa y consistente de la ley penal. La propuesta de integración de ambos artículos no solo fortalece la coherencia interna del sistema penal, sino que también asegura que la ley sea precisa y predecible, lo que es crucial para la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica del procesado. Además, es evidente la laguna normativa en el artículo 444°, que puede ser suplida con una modificación de la redacción, añadiendo el artículo 186° y la frase: “siempre que no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso es considerado como delito”. La modificación contribuiría significativamente a respetar el principio de legalidad, que exige que las normas sean claras, precisas y no den lugar a interpretaciones arbitrarias, donde esta propuesta para modificar el artículo 444° se sustenta en mantener la sistemática de los artículos 185 y 186, tal como pasa en analogía con los artículos 121, 122 y 441, asegurando una justicia penal equitativa y predecible.

CAPÍTULO V:

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. En relación con el objetivo general, se concluye que el análisis del concepto de “autonomía operativa” del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 evidencia inconsistencias que vulneran el principio de legalidad, al generar una cláusula indeterminada que afecta la claridad normativa, advirtiendo una ruptura de la coherencia interna del Código Penal al desvincular el hurto agravado de su tipo base y omitir la cuantía como elemento esencial, confirmando la existencia de una laguna normativa en el artículo 444°, cuya corrección resulta necesaria para asegurar una aplicación coherente y previsible de la ley penal.
2. En relación con el primer objetivo específico, el análisis revela que la cuantía del bien hurtado es un elemento esencial para configurar el hurto agravado, donde la omisión de este parámetro genera confusión y afecta la coherencia normativa, además de vulnerar el principio de legalidad al crear ambigüedad en la aplicación de la norma, donde la inclusión del artículo 186° en la redacción del artículo 444° es crucial para restaurar la coherencia interna del sistema penal y asegurar la aplicación justa y proporcional de la ley.
3. En relación con el segundo objetivo específico, el hurto agravado debe depender del hurto simple, ya que las agravantes son una extensión lógica de este tipo básico, desvincular ambos tipos penales rompe la coherencia normativa y genera vacíos legales que afectan la aplicación uniforme de la ley, esta desvinculación vulnera el principio de legalidad al crear inseguridad jurídica, donde la dependencia entre ambos tipos es esencial para restaurar la coherencia y garantizar una interpretación clara y uniforme en el sistema penal, dado que el artículo 186° no contiene un

supuesto de hecho que pueda determinar un hecho propio distinto del artículo 185, para que el hurto agravado se catalogue como tipo penal autónomo.

4. En relación con el tercer objetivo específico, se concluye que el concepto de “autonomía operativa” del hurto agravado, establecido en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, presenta inconsistencias que vulneran los principios de legalidad y coherencia normativa. La supresión de la cuantía y la desvinculación del tipo básico evidencian que el artículo 186° no posee un supuesto de hecho autónomo. Asimismo, se confirma la existencia de una laguna normativa en el artículo 444°, que afecta la correcta aplicación del tipo penal. En conjunto, estos elementos demuestran que la autonomía operativa carece de sustento dogmático y resulta incompatible con la estructura del hurto en el Código Penal peruano.
5. En relación con el cuarto objetivo específico, la modificación del artículo 444° para incluir el artículo 186° es necesaria para garantizar la coherencia normativa y evitar contradicciones interpretativas entre el hurto simple y agravado, esta modificación fortalecería la aplicación justa de la ley y mejoraría la seguridad jurídica al ofrecer claridad y precisión en la aplicación del hurto agravado, asegurando que se respeten los principios de legalidad y coherencia normativa en el sistema penal, donde la propuesta de modificación cierra la laguna normativa del artículo 444° y mantiene la sistemática de los artículos 185 y 186, alineándose con la estructura coherente de otros artículos del Código Penal.

5.2. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda inaplicar el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 para restablecer la coherencia normativa entre los tipos penales de hurto simple y agravado, y por consiguiente inaplicar doctrina legal que crea el término de "autonomía operativa" del hurto agravado, esta inaplicación garantizaría la aplicación clara y coherente de la ley, respetando el principio de legalidad y evitando interpretaciones arbitrarias que comprometan la seguridad jurídica.
2. Se recomienda incluir la cuantía del bien hurtado como un elemento normativo esencial para el hurto agravado en la redacción del artículo 444°, esta medida aseguraría que el tipo penal sea más claro y predecible, evitando la ambigüedad en su aplicación y proporcionando una base objetiva para el hurto agravado, respetando el principio de legalidad.
3. Se recomienda restaurar la dependencia entre el hurto agravado y el hurto simple para asegurar que las agravantes sean una extensión lógica del tipo base, donde esta dependencia garantizaría la coherencia normativa y eliminaría los vacíos legales que afectan la aplicación uniforme de la ley, asegurando que las sanciones se ajusten al principio de legalidad.
4. Se recomienda realizar la revisión del criterio de “autonomía operativa” del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, restableciendo la dependencia entre el hurto simple y el agravado conforme a los principios de legalidad y coherencia normativa. Asimismo, debe precisarse la cuantía como elemento objetivo del hurto agravado y corregirse la relación entre los artículos 185°, 186° y 444° del Código Penal, a fin de evitar interpretaciones extensivas y asegurar una aplicación uniforme del tipo penal.
5. Se recomienda la integración del artículo 186° en el artículo 444° del Código Penal para garantizar la coherencia normativa y evitar interpretaciones contradictorias, lo

que permitiría que el hurto agravado dependa del tipo base de manera precisa y alineada con el principio de legalidad, mejorando así la seguridad jurídica.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS FÍSICOS

- Almanza, F. (2022). *Manual de derecho penal. Parte general*. San Bernardo Libros Jurídicos
- Aranzamendi, L. (2013). *Instructivo Teórico Práctico del diseño y redacción de la tesis en Derecho*. Grijley
- Arbulú, J. (2019). *Delitos contra el patrimonio*. Instituto Pacífico S.A.C.
- Caro, D. (2019). *Derecho Penal y Procesal Penal*. Gaceta Jurídica.
- Caro, D. y Reyna, L. (2023) *Derecho penal: parte general*. Escuela de Derecho LP SAC
- Clavijo, D. Guerra, D., Yáñez, D. (2014). *Método, metodología y técnicas de la investigación aplicada al derecho*. Grupo Editorial Ibañez.
- Esquivel, J. (2011). *TOMO 162 - Gaceta Jurídica del Poder Judicial del Perú, Acuerdo Plenario N° 4-2011/CJ-116*.
- García, P. (2019). *Derecho penal Parte General* (3° ed). Ideas.
- García, P. (2022). *Derecho penal económico*. Instituto Pacífico S.A.C.
- García, P. (2025). *Delitos contra el patrimonio*. Instituto Pacífico S.A.C.
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6° ed.). Interamericana editores.
- Igartua, J. (2022). *La interpretación de la ley*. Ara Editores.

Infanzón, J., Pinedo, C., Oré E., Peña Cabrera, A., Balcázar, J., Tello, J. y Bravo, C. (2013). *Robo y hurto* (1° ed.). Gaceta Jurídica.

Muñoz, F. y García, M. (2010). *Derecho penal parte general* (8° ed.). Tirant lo blanch.

Pacori, E. (2019). *Metodología y diseño de la investigación científica* (2° ed). FFECAAT E.I.R.L.

Palacios, J., Romero, H. y Ñaupas, H. (2016). *Metodología de la investigación*. Griley.

Peña, A. (2011). *Derecho Penal Parte General (Tomo II)*. Rodhas SAC

Peña, A. (2019). *Derecho Penal Parte Especial: Tomo II (5ta ed.)*. IDEMSA.

Reyna, L. (2016). *Derecho penal parte general*. Gaceta Jurídica S.A.

Roxin, C., Jakobs, G., Schunemann, B., Frisch, W., y Kohler, M. (2000). *Sobre el estado de la Teoría del Delito*. Civitas Ediciones S.L.

Sabino, A. (2020). *Metodologías de investigación educativa*. Saberes del conocimiento.

Villa, J. (2014). *Derecho penal*. Parte general. Ara Editores

Villavicencio, F. (2006). *Derecho Penal. Parte General*. Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.

Witker, J. (2009). *La investigación Jurídica*. Mc. Graw-Hill

LIBROS VIRTUALES

Misari, C. (2017). Derecho penal: parte general. Universidad Continental.
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4251/1/DO_UC_312_MAI_UC0193_2018.pdf

Salinas, R. (2019). *Derecho Penal. Parte Especial*. IUSTITIA.
<https://libreriasgrijley.com/wp-content/uploads/2024/04/DERECHO-PENAL-PARTE-ESPECIAL-VOL-2-RAMIRO-SALINAS.pdf>

Tamayo y Tamayo, (2010). *El Proceso de la Investigación Científica*. Limusa Noriega Editores.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/227860/El_proceso_de_la_investigaci_n_cient_fica_Mario_Tamayo.pdf

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Álvarez, H. (2015). El principio de legalidad penal y la exigencia de un meta-principio. *Actualidad Penal*, 18, 136-161.
<https://biblioteca.amag.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19936>

Chinchay, A. (2016). Proporcionalidad, legalidad, política criminal, boca de la ley y otros intentos de objetivar la justicia. *Gaceta Penal & Procesal Penal*, 80, 13-33.
https://www.academia.edu/27768785/Proporcionalidad_legalidad_politica_criminal_boca_de_la_Ley_y_otros_intentos_de_objetivar_la_justicia

Conte, R., Morel, R. y Fleitas, M. (2021). Robos y hurtos en la ciudad de Clorinda: un análisis geográfico a partir de los medios gráficos. *Revista Universitaria de Geografía*, 30(1), 77-106.
<https://www.redalyc.org/journal/3832/383267985003/383267985003.pdf>

- Loayza, E. (2021). El fichaje de investigación como estrategia para la formación de competencias investigativas. *Educare et comunicare*, 9 (1), 67-77.
<https://www.aacademica.org/edward.faustino.loayza.maturrano/22.pdf>
- Muntané, J. (2010). Introducción a la Investigación básica. *Revista andaluza de patología digestiva*, 33 (3), 221-227.
- Navarro, P. (2022). Coherencia normativa y lógica deóntica. Comentario a José Juan Moreso, Lo normativo: variedades y variaciones. *EUNOMÍA. Revista En Cultura De La Legalidad*, (22), 497-512.
<https://doi.org/10.20318/eunomia.2022.6833>
- Pablos, A. (2012) La interpretación de la ley penal. *VLEX*, 823-864.
<https://vlex.es/vid/interpretacion-ley-penal-568117550>
- Piccini, E. (2011). El muestro: técnica al servicio de la valoración documental. *Informatio*, 14(16), 45-61.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7454154>
- Reategui, J. (2024). La Punibilidad en el derecho penal. *Actualidad penal*, 117., 93-110 <https://m.actualidadpenal.pe/revista-digital/edicion/actualidad-penal-117/la-punibilidad-en-el-derecho-penal>
- Rodilla, M. (2009). ¿Unidad lógica o dinámica? Coherencia y sistema jurídico en Kelsen. *DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 32 255-314.
<https://doxa.ua.es/article/view/2009-n32-unidad-logica-o-dinamica-coherencia-y-sistema-juridico-/pdf>

- Támara, C. (2020). El principio de legalidad como exigencia mínima de legitimación del poder penal del Estado. *Revista Oficial del Poder Judicial*, 12(14), 249-266. <https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/267>
- Tantaleán, R. (2015). El alcance de las investigaciones jurídicas. *Derecho y Cambio Social*. (41), 1-22. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456857>
- Tena, R., (2014). El principio pacta sunt servanda y la cláusula rebus sic stantibus en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Desarrollos actuales y perspectivas históricas, 405-427, D. F.: Novum
- Vallejo, M. (2018). El principio de coherencia normativa y su aplicación en el derecho peruano. *Revista de Derecho*, 22(2), 123-145
- Villarreal, O. y Landeta, J. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa: Una aplicación a la internacionalización. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 16(3), 31-52. [https://doi.org/10.1016/S1135-2523\(12\)60033-1](https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60033-1)

TESIS

- Ampuero, J. (2018). *El principio de legalidad penal y la aplicación del Estatuto de Roma en el ámbito interno desde la perspectiva del derecho internacional*. [Tesis de posgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://repositorio.pucp.edu.pe/items/e7ba4470-23fb-4411-a3b7-f37095882c10>

Bayona, M. (2018). *El valor del bien mueble como condición objetiva de punibilidad, y su aplicación en el artículo 186° del Código Penal a propósito del Acuerdo Plenario 004-2011* [Tesis de maestría, Universidad de Piura]. Repositorio PIRHUA.
<https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3707>

Castañeda, C. (2013). *La cuantía en el delito de hurto agravado* [Tesis de pregrado, Universidad Señor de Sipán]. Repositorio USS.
<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/3574/CASTA%c3%91EDA%20SERRA%20CHRISTOPHER%20MARTIN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cevallos, H. (2013). *La técnica de remisión dinámica de las normas en blanco en los delitos contra el medio ambiente y los principios de legalidad y debido proceso*. [Tesis de posgrado, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio institucional de la Universidad Nacional de Trujillo.
<https://dspace.unitru.edu.pe/items/b3e4692d-2236-4264-8166-9c3749c71a73>

Delgado, A. (2020). *Las leyes penales en blanco y la vulneración al principio de legalidad y la seguridad jurídica*. [Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio institucional de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
<https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/2862>

González, F. (2016). *Las Leyes Penales en Blanco en los Delitos contra el ambiente y la naturaleza o pacha mama en el Código Orgánico Integral Penal y su conflicto con el Principio de Legalidad*. [Tesis de pregrado, Universidad de

las Américas]. Repositorio institucional de la Universidad de las Américas.
<https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/6986>

Medina, N. (2018). *La vulneración del principio de lesividad en el hurto agravado por la determinación de la cuantía en el Perú* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio UCV.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/19909>

Rentería, F. y Tello, I. (2016). *La cuantía como elemento objetivo para la tipificación del delito de hurto agravado* [Tesis de pregrado, Universidad Señor de Sipán]. Repositorio USS.
<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/4422/Renteria%20Ubillus%20%20-%20Tello%20Barahona%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Simmons, E. R. (2025). *Criminal behavior responses to changing penalties: Estimating the impact of felony theft threshold changes* [Tesis de posgrado, Clemson University]. Repositorio institucional de la Clemson University.
https://open.clemson.edu/all_theses/4589

Talledo, J. (2022). *Controversia de criterios de la cuantía y la percepción de impunidad del delito de hurto* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. Repositorio UNJFSC.
<https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/6480/TESIS%20TALLEDO%20FARRO%20JESUS%20ALBERTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Valderrama, V. (2016). *La determinación judicial de la pena de acuerdo al artículo 45-A del Código Penal y el principio de proporcionalidad*. [Tesis de

pregrado, Universidad Andina de Cusco]. Repositorio institucional de la Universidad Andina de Cusco. <https://hdl.handle.net/20.500.12557/1123>

Vásquez, E. (2023). *El principio de legalidad en la determinación judicial de la pena en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, 2015-2018*. [Tesis de posgrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio institucional de la Universidad Nacional Federico Villarreal. <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/8215>

PÁGINAS WEB

Bramont, L. (2022). *Interpretación de la ley penal. Pasión por el Derecho*. <https://lpderecho.pe/interpretacion-ley-penal-luis-a-bramont-arias/>

García, L. (2010). El método inductivo. Recuperado de <https://gplresearch.com/que-es-el-metodo-inductivo/>

Prado, S. (2017). *Clases y tipos penales: Parte especial del Código Penal. Pasión por el Derecho*. <https://lpderecho.pe/clases-tipos-penales-parte-especial-codigo-penal/>

Trujillo, J. (2020). *Principio de coherencia normativa: ¿tipicidad es antinormatividad? Pasión por el derecho*. https://lpderecho.pe/principio-coherencia-normativa-tipicidad-es-antinormatividad/#_ftnref5

NORMAS Y JURISPRUDENCIA

Código Penal del Perú. (1991). *Decreto Legislativo 635. Código Penal*. <https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/CODIGOPENAL.pdf>

Congreso de la República del Perú. (1993). *Constitución Política del Perú*.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/198518/Constitucion_Politica_del_Peru_1993.pdf

Corte Suprema de Justicia de la República (2011). *Acuerdo plenario N° 4-2011/CJ-116*.
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8d41c3004075b5d2b453f499ab657107/ACUERDO+PLENARIO+N%C2%B0+4-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8d41c3004075b5d2b453f499ab657107>

Corte Suprema de Justicia de la República (2011). *Cas. N° 234-2017 La Libertad*

Corte Suprema de Justicia de la República (2014). *R. N. N° 2114-2014 Huancavelica*

Corte Suprema de Justicia de la República (2016). *R. N. N° 1202-2016 Lima*

Corte Suprema de Justicia de la República (2017). *Casación N° 286-2017 Cajamarca*

Corte Suprema de Justicia de la República (2018). *R. N. N° 999-2018 Lima Este*

Corte Suprema de Justicia de la República (2011). *Casación N° 87-2011 Arequipa*

Tribunal Constitucional (2006). *Expediente N° 047-2004-AI/TC*.
<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-2004-AI.html>

Tribunal Constitucional (2011). *Expediente N° 01469-2011-PHC/TC*.
<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01469-2011-HC.html>

Tribunal Constitucional del Perú. (2003). *Sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente N.º 010-2002-AI/TC* .

ANEXOS

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116				
Problema	Objetivos	Hipótesis	Variable	Metodología
¿Cuáles son las inconsistencias del concepto de autonomía operativa del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116?	<p>Analizar las inconsistencias del concepto de la “autonomía operativa” del delito de Hurto Agravado instituidos como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 en base al método de interpretación extensiva.</p> <p>Contrastar que el concepto de “autonomía operativa” del hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, depende de la concurrencia previa de la cuantía del bien hurtado como elemento del tipo para el delito de hurto agravado.</p> <p>Analizar el concepto de “autonomía operativa” del delito de hurto agravado en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, como dependencia de la</p>	<p>Dado que, se advierte la creación del concepto de “autonomía operativa” del hurto agravado en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116; entonces, es probable que, este concepto, contenga inconsistencias, las cuales son catalogar al delito de hurto agravado como un tipo penal autónomo, suprimir al principio de proporcionalidad, crear una cláusula legal indeterminada vulnerando la vertiente de lex stricta del principio de legalidad.</p>	<p>Inconsistencias del concepto de autonomía operativa del hurto agravado.</p> <p>Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116.</p>	<p>Método general: Método inductivo. Método descriptivo.</p> <p>Método de investigación jurídica: Método dogmático</p> <p>Tipo de investigación: Investigación básica.</p> <p>Diseño: No experimental Transversal Propositiva</p> <p>Población: Sujetos activos pasibles de imputación penal, en base a la legislación nacional.</p> <p>Muestra: Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116. Muestreo no probabilístico.</p>

	<p>conurrencia previa del delito de hurto simple.</p> <p>Describir las inconsistencias del concepto de “autonomía operativa” del delito de hurto agravado establecida en el Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116, a partir del análisis de la interpretación doctrinal y extensiva.</p> <p>Proponer la modificación de la redacción normativa del artículo 444° del Código Penal, a través de un proyecto de ley.</p>			<p>Muestra sujeto voluntario.</p> <p>Técnicas de recolección de datos: Fichaje Análisis de casos Entrevistas</p> <p>Instrumentos de recolección de datos: Guía de fichaje. Guía de análisis del caso. Guía de entrevista.</p>
--	--	--	--	---

ANEXO N° 02: PROPUESTA DE MODIFICACION NORMATIVA

PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 186° AL ARTÍCULO 444° DEL CÓDIGO PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 635

Artículo 1°. Incorporación del artículo 186° al artículo 444° del Código Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 635

“Artículo 444.- Hurto simple y daño

El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185, **186** y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase el diez por ciento de una unidad impositiva tributaria (UIT), será reprimido con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien sustraído o dañado.

La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 189-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no sobrepasa el diez por ciento de una unidad impositiva tributaria (UIT)”.

Artículo 2°. - Vigencia y aplicación de la Ley

La presente Ley rige a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ASPECTOS GENERALES

· Principio de legalidad

Autores como García (2025) señalan que el principio de legalidad establece que nadie puede ser sancionado penalmente por un acto que no esté previsto de manera previa por la ley como delito o con una pena no establecida en ella.

Según lo precisado por el Tribunal Constitucional (2011) en la sentencia del Exp. 01469-2011-PHC/TC, señala que el principio de legalidad prohíbe la creación de “clausulas legales indeterminadas”.

En este sentido, el principio de legalidad asegura la objetividad, ya que las acciones susceptibles de sanción deben estar claramente descritas en la ley. Como señala Caro y Reyna (2023), este principio “impone al legislador la obligación de formular de manera clara y precisa las conductas que decide tipificar, es decir, la ley penal no debe generar ambigüedades en su aplicación, evitando así la actuación arbitraria del juzgador” (p. 141).

En atención a las diferentes definiciones, se verifica que el principio de legalidad es esencial para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que establece límites claros a la acción punitiva del Estado, al exigir que las conductas delictivas estén previamente

tipificadas en la ley, se evita cualquier actuación arbitraria y se asegura que las personas conozcan, de antemano, las consecuencias legales de sus acciones.

- **Manifestaciones del principio de legalidad**

La doctrina penal acepta, que el principio de legalidad tiene cuatro formas de manifestación: La reserva de ley, el mandato de certeza o determinación, la ley previa y la prohibición de analogía, sobre ello García (2025) señala:

NULLUM CRIME SINE LEGE SCRIPTA - La reserva de ley (lex scripta): La reserva de ley establece que únicamente la ley puede crear delitos y establecer penas, excluyendo otras fuentes como la costumbre o la jurisprudencia. La ley en sentido formal, elaborada por el Congreso, es la base para tipificar delitos y penas. En algunos países, como España, se requiere una ley orgánica para regular ciertos delitos, pero en Perú, una ley ordinaria es suficiente. Además, se considera que decretos legislativos y decretos leyes también cumplen con la reserva de ley, siempre que sean aprobados dentro del marco constitucional, en especial en situaciones de gobierno especial. El concepto de ley penal se extiende a decretos que tienen rango de ley, aunque algunos cuestionan si decretos de urgencia pueden ser utilizados para regular delitos.

Según refiere Almanza (2022), no se puede sancionar de ninguna manera ni crear delitos basados en la costumbre legal. A causa de este subprincipio, queda excluido el derecho consuetudinario para calificar los actos delictuosos y fijar la pena correspondiente a los responsables. (p. 51)

NULLUM CRIME SINE LEGE CERTA - La taxatividad de la ley (lex certa): El principio de legalidad obliga al legislador a precisar las conductas delictivas y las penas de manera clara. Esta taxatividad es esencial para evitar abusos judiciales y garantizar la seguridad jurídica. La ley penal debe ser suficientemente precisa para que no se deje espacio a la interpretación arbitraria. Aunque se exige claridad, la ley penal no necesita ser completamente detallada en todos los casos, ya que algunos aspectos específicos se dejan a la interpretación judicial. En situaciones complejas o cambiantes, como las económicas, se permite cierta flexibilidad en la tipificación de delitos, pero siempre con un control para evitar que se afecten derechos fundamentales.

El mandato de certeza garantiza que los ciudadanos conozcan las conductas delictivas y sus sanciones, evitando la arbitrariedad judicial en la calificación de delitos. Sin embargo, la ley penal no puede cubrir todas las situaciones, por lo que se requiere una evaluación caso por caso. La flexibilización del mandato de certeza, mediante cláusulas generales o referencias a leyes extrapenales, permite adaptar el derecho penal a nuevas realidades, siempre que no se contravenga el principio de determinación y se evite la arbitrariedad.

En dicho principio, conforme refiere Almanza (2022), la norma debe ser lo bastante clara para que cualquiera pueda entenderla. Esto significa que las normas deben ser precisas, específicas y describir exactamente para que los destinatarios sepan cuáles son los actos inculcados y la sanción que les corresponde.

Para García (2022), este mandato de certeza:

(...) impone al legislador la obligación de precisar en la ley todos los elementos constitutivos de la conducta penalmente sancionada y la pena a imponer. (...) Al legislador le

corresponderá establecer, de manera general, los elementos constitutivos de la forma de actuación defraudatoria de la norma y el marco abstracto de la pena a imponerlo (...) (p. 159).

Principio de taxatividad:

El principio de taxatividad, según Támara (2020), es una extensión del principio de legalidad y establece que las conductas punibles y las penas deben estar claramente definidas por la ley, sin ambigüedades. Este principio se deriva del artículo 2, inciso 24, literal a), de la Constitución, que garantiza a los ciudadanos que solo estarán sujetos a lo que la ley establece. La ley penal debe ser escrita de manera clara y precisa, utilizando un lenguaje accesible que cualquier persona pueda comprender, sin tecnicismos o términos vagos, para evitar interpretaciones diversas o arbitrarias que puedan generar inseguridad jurídica.

Además, el principio de taxatividad protege contra interpretaciones subjetivas y arbitrarias de la ley penal, asegurando que no se apliquen sanciones sin una base legal clara y preexistente. La ley penal debe ser objetiva, clara y precisa, lo que facilita su cumplimiento y garantiza la certeza jurídica. De esta forma, se previene el abuso del poder punitivo del Estado, permitiendo que la ley se perciba de manera efectiva y sin margen para su manipulación, asegurando que los fines del derecho penal sean alcanzados de manera justa y equitativa (Támara, 2020).

Así mismo, teniendo en cuenta la Casación N° 87-2011-Arequipa, señala que el principio de máxima taxatividad exige al legislador que agote los recursos técnicos para otorgar la mayor precisión posible a su obra y, de otro lado, se prohíbe la creación de cláusulas legales indeterminadas (Corte Suprema de Justicia de la República, 2011).

De lo señalado por diversos autores, se considera que el principio de taxatividad es fundamental para garantizar que las leyes penales sean claras y precisas, evitando interpretaciones subjetivas que puedan generar inseguridad jurídica, dado que este principio protege a los ciudadanos de sanciones arbitrarias y asegura que solo se sancionen conductas claramente tipificadas en la ley y de esta manera se refuerza la certeza jurídica y se previene el abuso del poder punitivo del Estado.

NULLUM CRIME SINE LEGE PREVIA - La prohibición de retroactividad (*lex praevia*): El principio de irretroactividad establece que una ley penal no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su promulgación, ni imponer penas no previstas por la ley en su momento. Esta manifestación del principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica y evita que las personas sean sancionadas por actos que no eran delitos en el momento de su comisión. Sin embargo, existe una excepción para retroactividad benigna, en la que una ley posterior más favorable al reo puede aplicarse retroactivamente. Este principio asegura que las leyes penales sean claras y predecibles, protegiendo los derechos fundamentales de los individuos.

Conforme nos señala Almanza (2022), este principio consiste en la irretroactividad de la norma penal. Por regla, las normas se deben aplicar inmediatamente, es decir, al día siguiente de su publicación en El Peruano.

NULLUM CRIME SINE LEGE STRICTA - La prohibición de analogía (*lex stricta*): La prohibición de analogía impide que los jueces utilicen el razonamiento analógico para sancionar conductas no tipificadas en la ley penal o para agravar penas sin base legal. El artículo 139 de la Constitución Política y el Código Penal prohíben que los jueces amplíen

el alcance de la ley mediante la analogía, ya que esto podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se busca que la interpretación de la ley penal se ajuste al tenor literal y no se base en interpretaciones que modifiquen el alcance del tipo penal. Las decisiones judiciales deben estar fundamentadas en la ley, no en analogías que alteren su aplicación (pp. 143-173).

El subprincipio consiste en la garantía de prohibición de analogía, el cual va dirigido a los jueces, a fin de que no apliquen analogía en el ámbito penal, toda vez que, los jueces aplican analogías usualmente para resolver lagunas jurídicas, pero en el derecho penal no se puede usar analogía cuando es desventajosa para el reo (Almanza, 2022).

En base a lo señalado por diversos autores, se evidencia que el principio de legalidad es esencial para garantizar un sistema de justicia claro y predecible, protegiendo así los derechos fundamentales del ciudadano, donde las manifestaciones de este principio, como la reserva de ley y la prohibición de analogía, aseguran que el poder punitivo del Estado se limite a lo expresamente establecido en la ley, evitando interpretaciones arbitrarias, esto permite reforzar la seguridad jurídica y la protección de la libertad individual, evitando abusos del poder estatal.

· **Principio de coherencia normativa**

El principio de coherencia normativa, establece que no deben existir conflictos, contrariedad o antinomias entre normas jurídicas pues estas son consecuencia de la actividad interpretativa que implica observar mínimos criterios de logicidad; sin embargo, esta situación no necesariamente se predica en la actividad legislativa productora de dispositivos normativos. (Rodilla, 2009)

Así mismo según el Tribunal Constitucional (2006), en el Pleno Jurisdiccional, Exp.047-2004-AI/TC, el principio de coherencia normativa, significa: “la existencia de la unidad sistémica del orden jurídico, lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas que lo conforman”.

En base a las definiciones señaladas, se determina que el principio de coherencia normativa es esencial para garantizar que el sistema jurídico funcione de manera lógica y armoniosa, dado que la ausencia de contradicciones entre las normas jurídicas no solo facilita su aplicación, sino que también refuerza la credibilidad del sistema de justicia.

· **Los tipos penales básicos, autónomos y derivados**

Los tipos penales se clasifican en básicos, autónomos y derivados, según su estructura y relación con otros tipos, esta clasificación determina cómo se tipifican y sancionan las conductas delictivas dentro del sistema jurídico, sobre ello se tiene:

Tipo penal básico: Los tipos básicos son aquellos que describen una conducta matriz que será la que identifique a la conducta delictiva, como «matar a otro» en el caso del homicidio (Prado, 2017)

Tipo penal autónomo: Conforme refiere García (2019):

(...) Finalmente, los tipos penales autónomos, también llamados, *delictum sui generis* son aquellos que se derivan de otra figura delictiva, pero que adquieren autonomía en cuanto a la entidad de su injusto, desarrollando incluso sus propios tipos penales derivados. Por

ejemplo, el delito de robo del artículo 189 del CP en relación con el delito de hurto. (pp. 397-398)

Por otro lado, Prado (2017) señala que los tipos penales especiales o autónomos describen conductas delictivas diferentes a las del tipo básico, pero que mantienen una relación indirecta con el bien jurídico protegido, los que se caracterizan por su especificidad y por no depender de tipos penales previos para su existencia.

De ello, se desprende que el tipo penal autónomo es aquel que está descrito en la ley de manera autónoma, con características propias y sin necesitar que se haya cometido otro delito para que se considere como tal.

Tipo penal derivado: Conforme refiere García (2019):

(...) El tipo penal básico establece los elementos esenciales de una figura delictiva. Por ejemplo, el delito de hurto simple del artículo 185 del CP establece como elementos esenciales de esta figura delictiva el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno, la sustracción del lugar en que se encuentra y la finalidad de provecho. En relación con este tipo penal se pueden desarrollar tipos penales que, en atención a alguna particularidad, pueden agravar o atenuar la pena prevista en el tipo básico (por ejemplo, el hurto con destreza como supuesto agravado del artículo 186 inciso 3 del C P). En estos casos, el tipo penal derivado debe reunir necesariamente los elementos esenciales del tipo penal básico. (p. 397)

Los tipos penales derivados son aquellos que repiten la conducta delictiva del tipo básico, pero añaden circunstancias agravantes, como en el parricidio, o atenuantes, como en el infanticidio. Estos tipos pueden ser calificados o privilegiados, con una pena superior o inferior a la del tipo básico. Su diferenciación se basa en la presencia de circunstancias que modifican la gravedad de la pena (Prado, 2017).

Se desprende de lo anterior que, un tipo penal derivado es una figura delictiva que surge a partir de un tipo básico o tipo base, añadiendo o modificando elementos que lo cualifican, agravan o atenúan. Es decir, se parte de un delito "principal" y se crea una nueva figura incorporando nuevas características que alteran la gravedad de la sanción o la forma en que se comete el delito.

· **Acuerdo Plenario N°4-2011/CJ-116**

Los jueces supremos en el Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116 refieren que en la actualidad coexisten, en la jurisprudencia y en las doctrinas nacionales, posiciones discrepantes en torno a si resulta aplicable el requisito del valor del bien mueble, objeto de hurto (según el art. 444 del CP), para la configuración de las circunstancias agravantes contenidas en el art. 186 del CP, el denominado hurto agravado, por lo que han establecido, por mayoría, reglas vinculantes respecto de este tópico. Aún con ello, se identifican dos posiciones respecto a la temática:

Primera posición: Está a favor de la observancia del valor del bien mueble sustraído para la configuración del tipo penal agravado, sustentando su posición principalmente en los siguientes argumentos:

a) Se respeta el principio de legalidad —principio pilar de nuestro Estado de derecho— como también la teoría del tipo, específicamente las funciones del tipo que cumplen una función

garantizadora, ya que el hurto agravado exige la concurrencia de todos los elementos del hurto simple, incluyendo el monto del objeto de acción, por lo que en el supuesto de no concurrir dicha circunstancia se estaría ante un supuesto de falta.

b) Como el patrimonio es el principal bien jurídico afectado, se requiere una lesión considerable. En tal virtud, las conductas que no manifiestan un grado de lesividad significativo al bien jurídico tutelado deben ser sustraídas del ámbito de punición, en atención a la opción político-criminal seguida por el CP, y que está basada en los principios de ultima ratio y mínima intervención.

Segunda posición: Defiende la autonomía del hurto agravado frente a la exigencia de que el bien mueble objeto del delito alcance una cuantía superior a una remuneración mínima vital. Esta posición plantea los siguientes argumentos:

a) El hurto agravado importa una pluriofensividad de bienes jurídicos.

b) En irrestricto respeto del principio de legalidad —base fundamental del derecho penal—, el art. 444 CP exige taxativamente un monto superior a una remuneración mínima vital tan solo para el supuesto de hecho del art. 185 del CP (hurto simple), mas no del hurto agravado (art. 186 del CP), por lo que debe concluirse en forma lógica y coherente que nuestro sistema punitivo no exige cuantía para la configuración del hurto agravado.

c) Impide se genere impunidad de las conductas ilícitas (Arbulú, 2019, pp. 32-33)

Sobre lo mencionado Peña (2019) manifiesta que el Acuerdo Plenario subraya la autonomía del hurto agravado frente a los requisitos de la cuantía, especificando que no es necesario que el bien sustraído sobrepase un monto de remuneración mínima vital, a diferencia del hurto simple que sí lo exige. Este enfoque considera que el hurto agravado se configura a través de otros elementos, como la utilización de circunstancias agravantes como el hecho de cometer el hurto en una casa habitada o en complicidad con otros individuos, la Corte Suprema, por tanto, resuelve que el hurto agravado no requiere un criterio cuantitativo para su constitución.

En base a lo señalado por los autores, se verifica que la controversia sobre la cuantía del bien sustraído en el hurto agravado refleja una tensión entre la aplicación estricta del principio de legalidad y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades, donde la autonomía del hurto agravado sin exigir cuantía permite una mayor flexibilidad en su tipificación, pero podría generar incoherencias y riesgos de interpretación arbitraria, siendo crucial encontrar un equilibrio que respete el marco legal sin desvirtuar el principio de seguridad jurídica.

II. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

En relación a la problemática abordada en el presente proyecto de ley, se advierte la existencia de una laguna normativa sobre la ausencia del artículo 186° del CP en la redacción del artículo 444° del mismo, toda vez que, en el artículo antes señalado sí se describe el hurto simple, donde se establece un límite en el quantum del bien hurtado solo para el artículo 185° del CP, siendo este el tipo base del artículo 186° del CP; por tanto, se tiene como solución, la propuesta de modificación de la redacción normativa del artículo 444° del Código Penal, esta vez, incluyendo en su redacción al artículo 186°, del cual se desprenden las agravantes del hurto simple.

Ello, a partir del análisis correspondiente al Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116, mediante el cual se le otorga una “autonomía operativa” al hurto agravado, a fin de no depender de su tipo base sólo en relación al quantum del bien hurtado, por tanto, es necesaria la modificación del artículo 444° y así incluir el artículo 186°, para garantizar la coherencia entre el hurto simple y agravado, ya que, esta modificación ayudaría a restaurar la coherencia normativa, evitando interpretaciones contradictorias, asimismo, al integrar el artículo 186° en el 444°, se lograría una aplicación más clara y consistente de la ley, respetando el principio de legalidad.

Es así que, la modificación del artículo 444° para incluir el artículo 186° fortalecería la coherencia normativa, lo que cerraría el vacío interpretativo y mejoraría la seguridad jurídica. De modo que, la propuesta busca que el hurto agravado dependa del hurto simple, toda vez que, solo es un catálogo de agravantes establecidos en el artículo 186°, así, sin crear una cláusula legal indeterminada “autonomía operativa” (prohibida por el Tribunal Constitucional), lo que, evitaría la sobrecriminalización de hechos de baja relevancia, todo ello respetando el principio de legalidad.

Por ello, consideramos que la modificación del artículo 444° para incluir el artículo 186° es esencial para restaurar la coherencia normativa y garantizar una aplicación justa y consistente de la ley penal. La propuesta de integración de ambos artículos no solo fortalece la coherencia interna del sistema penal, sino que también asegura que la ley sea precisa y predecible, lo que es crucial para la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica del procesado.

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La promulgación de la presente norma no implica costo adicional al erario nacional puesto que lo que se trata es incorporar el artículo 186°, al artículo 444° del Código Penal, para la celeridad de los procesos y no generen más gastos de investigaciones fiscales.

IV. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Con respecto a los objetivos de la presente propuesta legislativa, se tienen el siguiente efecto en beneficio de la población peruana:

- Que, los procesos por hurto agravado sean más céleres.
- La presunción de inocencia no se vea vulnerada por una imputación por una laguna normativa.

V. BIBLIOGRAFÍA

Almanza, F. (2022). Manual de derecho penal. Parte general. San Bernardo Libros Jurídicos

Caro, C. y Reyna, L. (2023). Derecho penal: parte general. Escuela de Derecho LP SAC

Corte Suprema de Justicia de la República (2011). Casación N° 87-2011. Arequipa

García, P. (2022). Derecho penal económico. Parte General. Instituto Pacífico S.A.C.

García, P. (2025). Delitos contra el patrimonio. Instituto Pacífico S.A.C.

García, P. (2019). Derecho penal Parte General (3° ed). Ideas.

Prado, V. (2017). Clases y tipos penales: Parte especial del Código Penal. Pasión por el Derecho. <https://lpderecho.pe/clases-tipos-penales-parte-especial-codigo-penal/>

Rodilla, M. (2009). ¿Unidad lógica o dinámica? Coherencia y sistema jurídico en Kelsen. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 32 255-314. <https://doxa.ua.es/article/view/2009-n32-unidad-logica-o-dinamica-coherencia-y-sistema-juridico-pdf>

Támara, C. (2020). El principio de legalidad como exigencia mínima de legitimación del poder penal del Estado. Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14), 249-266. <https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/267>

Tribunal Constitucional (2006). Expediente N° 047-2004-AI/TC. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-2004-AI.html>

Tribunal Constitucional (2011). Expediente N° 01469-2011-PHC/TC. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01469-2011-HC.html>